(«Boletín Oficial del Estado» del 18); lo prevenido en la Orden ministerial de 15 de noviembre del mismo año («Boletín Oficial del Estado» del 13 de diciembre), y demás disposiciones aplicables.

Vistos, por último, el Decreto número 1637, de 23 de septiembre de 1959 («Boletín Oficial del Estado» del 26), convalidando las tasas por reconocimiento y autorización de Centros no estatales de enseñanza, y la Orden ministerial de 22 de octubre siguiente («Boletín Oficial» del Departamento del 26), dando normas para el cobro de las mismas.

Esta Dirección General ha resuelto:

1.º Autorizar con carácter provisional durante el plazo de un año el funcionamiento legal, supeditado a las disposiciones vigentes en la materia y a las que en lo sucesivo pudieran dictarse por este Ministerio, del Centro docente denominado «Academia San José», establecido en la calle de Juan Marañón, número 2, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por don Jaime Josa Savall, para la enseñanza primaria no estatal, bajo la dirección pedagógica del mismo señor, con una clase de párvulos: otra unitaria de niños, y otra unitaria de niñas, con matrícula máxima cada una de ellas de 40 alumnos, todos de pago regentadas, respectivamente, por doña Josefa Josa Gil, el señor Josa Savall y doña Josefa Llorca Grau, todos ellos en posesión del título profesional correspondiente, a tenor del apartado cuarto del artículo 27 de la mencionada Ley.

2.º Que la Dirección de este Centro docente queda obligada a comunicar a este Departamento:

a) El nombramiento de nuevo Director y profesorado en el momento mismo que se produzcan, así como cualquier incidente que pueda alterar la Organización del Colegio, como traslado de locales, ampliación o disminución de clases, aumento de matrícula, traspaso, etc.

b) Comunicar, asimismo, cuando el Colegio se clausure, ya sea por iniciativa de su Director, empresa, etc.; el no hacerlo así impedirá en el futuro conceder autorización a la persona o Entidad de que se trate para la apertura de nueva Escuela; y

c) A dar cuenta en la primera decena del mes de noviembre de cada año, por medio de oficio, del número total de alumnos matriculados en el curso académico, indicándose por separado los niños y las niñas, así como los maternas, párvulos, primaria (en todos sus Grados), cultura general, adultos enseñanzas artísticas, labores del hogar, etc., especificándose asimismo, los alumnos de pago (incluyéndose aquí los obligatorios de Protección Escolar) y los gratuitos.

3.º Que transcurrido el plazo de un año, a partir de la fecha de la presente, la Inspección de Enseñanza Primaria competente emita el preceptivo informe acerca del funcionamiento de este Centro docente, haciendo propuesta expresa de la ratificación definitiva o anulación, en su caso, de la autorización provisional que para su apertura oficial se le concede ahora.

4.º Que en el término de treinta días, a contar de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», la representación legal de este establecimiento de enseñanza abonará la cantidad de 250 pesetas en papel de Pagos al Estado, en concepto de tasa por la autorización que se le concede, en la Delegación Administrativa de Educación de Barcelona o en la Caja Única del Ministerio, indistintamente, remitiendo el correspondiente recibo acreditativo de este abono a la Sección de Enseñanza Primaria no estatal del Departamento, a fin de que ésta extienda la oportuna diligencia y dé curso a los traslados de esta resolución, bien entendido que de no hacerlo así en el plazo fijado esta autorización quedará nula y sin ningún valor ni efecto legal, procediéndose, en consecuencia, a la clausura inmediata del Colegio de referencia.

5.º Que se declare clausurado por haber quedado interrumpido en este Centro la «Academia Llorca», que estuvo establecida en la calle de Miquel Román, número 15, en la misma localidad, quedando anuladas, por tanto, las Ordenes de 12 de febrero de 1955 y 29 de diciembre de 1956 por las que se autorizó el funcionamiento de la misma con carácter provisional y definitivo, respectivamente; bien entendido que para nueva apertura del citado establecimiento habría que dar cumplimiento, ya fuese la anterior titular o por otra nueva persona o Entidad, a lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1945.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de noviembre de 1961.—El Director general J. Tena.

Er. Jefe de la Sección de Enseñanza Primaria no estatal.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Direccion General de Industria por la que se autoriza a don Negro Angelo el montaje en vehiculos automoviles de la instalacion carburadora de G. L. P. denominada «Jolly».

Vista la solicitud interesada por don Negro Angelo, de nacionalidad italiana domiciliado en Barcelona, San Isidro, número 4, de autorización de empleo de un prototipo de instalación carburadora de gas butano-propano denominada «Jolly», adaptable a los vehículos automóviles, construida por la entidad «Bronzi Special-Cibs», de Torino (Italia);

Resultando que efectuadas en la instalación carburadora citada las pruebas previstas en la Orden ministerial de Industria de fecha 6 de febrero de 1961 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo), han dado éstas un resultado favorable, tanto por lo que se refiere a la sobrepresión hidráulica como a la de funcionamiento prolongado, según informe emitido con fecha 26 de octubre de 1961 por el Laboratorio de Automóviles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar el montaje de la instalación carburadora de G. L. P. denominada «Jolly», construida por «Bronzi Special-Cibs», de Torino (Italia) en los vehículos automóviles que circulen por territorio nacional de acuerdo con la solicitud interesada por don Negro Angelo.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a VV. SS. muchos años.

Madrid, 27 de noviembre de 1961.—El Director general, José García Usano.

Sres. Ingenieros Jefes de todas las Delegaciones de Industria de España.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCIONES del Instituto Español de Moneda Extranjera por las que se anuncian los cambios aplicables en operaciones directas para Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, con vigencia, salvo aviso en contrario, desde el 18 al 24 de diciembre de 1961.

MERCADO DE DIVISAS

Cambios de cierre del día 15 de diciembre de 1961:

	Comprador	Vendedor
	Pesetas	Pesetas
1 Dólar U. S. A.	59,820	60,000
1 Dólar canadiense	57,321	57,493
1 Franco francés nuevo	12,203	12,244
1 Libra esterlina	163,054	163,559
1 Franco suizo	13,863	13,904
100 Francos belgas	120,185	120,556
1 Marco alemán	14,959	15,004
100 Liras italianas	9,638	9,637
1 Florin holandés	16,622	16,672
1 Corona sueca	11,536	11,620
1 Corona danesa	8,701	8,727
1 Corona noruega	8,399	8,424
100 Marcos finlandeses	18,603	18,663
1 Schilling austriaco	2,317	2,323
100 Escudos portugueses	209,556	210,136
1 Libra egipcia	171,400	171,900
1 Dólar de cuenta (1)	59,820	60,000

(1) Esta cotización es aplicable a los dólares de cuenta en que se formaliza el intercambio con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, China, Ecuador, El Salvador, Grecia, Hungría, Marruecos, México, Paraguay, Polonia, R. A. U. (Egipto), R. A. U. (Siria), R. D. Alemana, Rumanía, Túnez, Turquía, Uruguay y Yugoslavia.

Madrid, 18 de diciembre de 1961.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que regirán para la semana del 18 al 24 de diciembre de 1961, salvo aviso en contrario:

	Comprador Pesetas	Vendedor Pesetas
1 Dólar U. S. A.	52,77	60,12
1 Dólar canadiense	57,06	57,38
1 Franco francés nuevo	11,98	12,18
1 Franco argelino nuevo	11,64	11,84
1 Franco C F A nuevo	23,22	23,62
1 Libra esterlina	167,85	168,55
1 Franco suizo	13,80	13,87
100 Francos belgas	118,55	119,55
1 Marco alemán	14,88	14,98
100 Liras italianas	9,27	9,62
1 Florin holandés	16,42	16,58
1 Corona sueca	11,40	11,50
1 Corona danesa	8,59	8,69
1 Corona noruega	8,30	8,39
100 Marcos finlandeses	18,27	18,54
1 Schilling austriaco	2,25	2,32
100 Escudos portugueses	205,50	208,50
1 Dirham (100 francos marroquí).....	10,25	10,85
100 Cruceiros	13,90	14,65
1 Peso mejicano	4,62	4,72
1 Peso colombiano	6,30	6,40
1 Peso uruguayo	4,98	5,08
1 Sol peruano	1,87	1,90
1 Bolívar	12,25	12,85
1 Peso argentino	0,67	0,72
1 Libra egipcia	25,75	26,75

Madrid, 18 de diciembre de 1961.

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 2481/1961, de 14 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Luis D'Orey Pereira Contiño.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el excelentísimo señor don Luis D'Orey Pereira Contiño, y a propuesta del Ministro Secretario general de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general del Movimiento,
JOSE SOLIS RUIZ

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alfaz del Pi (Alicante) por la que se anuncia subasta para la enajenación de una parcela de bienes de propios.

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en la sesión del día 6 de noviembre último, se anuncia al público la subasta relativa a la enajenación de la parcela número 2 del inventario de bienes municipales denominada «El Estanque», de una superficie de 8.750 metros cuadrados, bajo el tipo de licitación de 136 pesetas metro cuadrado.

La duración del contrato se señala desde el día en que se adjudique la subasta hasta la formalización de la correspondiente escritura pública.

El pago de la cantidad en que se adjudique la subasta se hará el mismo día en que se otorgue la escritura ante el Notario autorizante.

La subasta se verificará en estas Casas Consistoriales el día en que se cumplan los veintinueve días hábiles siguientes a la inserción del presente en el «Boletín Oficial del Estado», a las doce horas, en cuyo acto se procederá a la apertura de las pliegos. De quedar desierto, se celebrará una segunda tres días hábiles después, a la misma hora y lugar.

Las proposiciones, debidamente reintegradas con arreglo a la Ley del Timbre, se presentarán suscritas por el propio licitador, o por persona que legalmente le represente, por medio de poder declarado bastante por el letrado don Juan Ronda Grau, extendidas en papel sellado de la clase sexta, ajustadas al modelo que a continuación se inserta, debiendo acompañarse a cada una de ellas el resguardo acreditativo de haber constituido en la Depositaria Municipal o en la Caja General de Depósitos, o sus sucursales, el dos por ciento del tipo de subasta, o sea la cantidad de veintitres mil ochocientas pesetas, en concepto de garantía provisional para tomar parte en dicho acto. También deberá acompañarse a cada proposición la declaración a que se refiere el apartado tercero del artículo 30 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

Los pliegos que contengan las proposiciones irán bajo sobre cerrado a satisfacción del presentador, en cuyo anverso deberá hallarse inscrito lo siguiente: «Proposición para tomar parte en la subasta de enajenación de la parcela número 2 del inventario de bienes del Ayuntamiento de Alfaz del Pi, denominada «El Estanque», y su presentación tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento los días y horas hábiles de oficina, desde el siguiente día a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado», y concluirá a las trece horas del último día hábil anterior al señalado para la apertura de las pliegos, no siendo necesario acreditar la personalidad del presentador.

Las proposiciones, reintegradas con timbres de seis pesetas, se redactarán con arreglo al siguiente modelo:

Si se presentasen dos o más proposiciones iguales más ventajosas que las restantes, se procederá conforme a las reglas cuarta y quinta del artículo 34 del Reglamento de Contratación.

Modelo de proposición

Don vecino de, domiciliado en la calle de, número, piso, provisto de carnet de identidad número, enterado del pliego de condiciones que ha de regir en la subasta de la enajenación de la parcela número 2 del inventario de bienes del Ayuntamiento de Alfaz del Pi, se comprometo a con sujeción a los citados documentos, por la cantidad de; asimismo se comprometo a cumplir las demás condiciones previstas en dicho pliego.

Alfaz del Pi, 6 de diciembre de 1961.—El Alcalde, F. Perucha.—El Secretario, Ricardo Vidal.—5.308.

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA

Sentencias

En la villa de Madrid a 25 de marzo de 1961; en los autos de juicio declarativo de mayor cuantía, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia de Utrera y en apelación ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, por don Teodomiro Martín García, mayor de edad, casado, Veterinario y vecino de Sevilla, contra don Primitivo Santos García, mayor de edad, del comercio y de la misma vecindad, sobre denegación de servidumbre; pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el demandante, representado por el Procurador don Cristóbal Estévez Álvarez con la dirección del Letrado don Alfonso de Cossio Coral; habiendo comparecido en este Tribunal Supremo el demandado y recurrido, representado y defendido, respectivamente, por el Procurador don Luciano Rosch Nadal y el Letrado don Manuel Rojo:

RESULTANDO que mediante escrito de fecha 13 de abril de 1955, don Teodomiro Martín García, representado por un Procurador, dedujo ante el Juzgado de Primera Instancia de Utrera, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra don Primitivo Santos García, sobre denegación de servidumbre; alegando como hechos:

Primero. Que el demandante, en virtud de compraventa celebrada con el anterior dueño don José Vicente Llorca y Llorca, según escritura pública otorgada en 26 de enero de 1953, es propietario de la siguiente finca: «Huerta de tierra compuesta de garrotes y naranjal, denominada «La Pesadilla», en término municipal de Dos Hermanas y sitio de «Venta Bermejás» y «Pesadilla», con una extensión de dos hectáreas cincuenta y siete áreas y noventa y una centiáreas; Linda por el Norte, con tierras de don Manuel Rivas López; por el Sur, con terrenos de don Francisco González Alcobá; por el Este, con tierras de don Francisco González Alcobá y don Primitivo Santos, y por el Oeste, con tierra de don Francisco González Alcobá»; que dicha finca había sido inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente a los tomos 519, folio 15, libro 142, finca 5.701 duplicado, inscripción séptima.

Segundo. Que según resultaba de los títulos y de las inscripciones registrales, la finca descrita era libre en absoluto de toda clase de servidumbres de paso y de otra naturaleza en favor del inmueble limítrofe propiedad del demandado don Primitivo Santos García, conocida por «La Arboleda» y que constituye parte del lindero Este de la descrita; que a pesar de ello el demandado pretende tener derecho a pasar por un camino que existe por el interior de la finca del actor y que conduce hasta la casa sita en dichas tierras, camino que se encuentra dentro de la finca del demandado en parte por un muro en parte por una acequia y en su restante extensión por un cerca de alambrado de espinos; que con motivo de la colocación de una cancela de madera en el camino referido, el demandado había planteado en el Juzgado interdicto para recobrar la supuesta posesión del paso y retirada de la cancela, juicio que había

sido desestimado por sentencia de 26 de febrero de 1954 y posteriormente revocada por la Audiencia.

Tercero. Que en el citado procedimiento interdictal, el demandado partía de la base de que el camino indicado discurría a través de la finca de su propiedad y no por la del demandante como era en realidad, por lo que al ser los hechos totalmente lo contrario, resulta atribuirse el paso por las tierras del actor, lo que en cuanto a la cuestión de simples hechos y sin entrar a discutir la procedencia del derecho, dado el procedimiento en que se había producido, venía a concederle la sentencia de la Audiencia; que por ello se hacía necesario el planteamiento de este litigio para resolver la cuestión en el sentido de declarar libre de servidumbre la finca del actor en favor de la del demandado. Invocó los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, y terminó suplicando que se dictara sentencia en su día por la que se declarase que la finca rústica propiedad del actor está libre de toda clase de servidumbre de paso ni de ninguna otra especie a favor de la finca limítrofe propiedad del demandado, y condenar a éste a estar y pasar por dicha declaración, apercibiéndole de que se abstenga de perturbar el derecho del actor, e imponiéndole las costas:

RESULTANDO que admitida a trámite la demanda, y emplazado el demandado don Primitivo Santos García, se personó en los autos representado por un Procurador, que con escrito de fecha 25 de mayo de 1955, alegando concretamente como hechos:

Primero. Que aceptaba el oprobatorio de la demanda, agregando que el demandado en 2 de enero de 1946 y ante Notario había comprado a don José de la Calzada Bayo el usufructo que el mismo tenía sobre la finca rústica «Las Pesadillas», hoy nombrada «La Arboleda» y a doña Mercedes de la Calzada la nuda propiedad de la expresada finca, que tenía una cabida de dos hectáreas veinticinco áreas y treinta y nueve centiáreas y una miliaera; escritura que había sido inscrita en el Registro de Alcalá de Guadaíra.

Segundo. Que de los títulos que había aportado el demandante su finca estaba libre de servidumbre de paso y de cualquier otra en favor de la finca del demandado, y que ello era una realidad, pero que también era una cosa y otra bien distinta la que con ello se pretendía demostrar, porque para que tal afirmación con vistas a los deseos del actor pudiera prosperar lo primero que debía saberse era si el terreno sobre el que estaba construido el camino de carros que de hecho separaba la finca de uno y otro, forma parte integrante de lo que era del actor, o por el contrario formaba parte de lo que era propiedad del demandado; que si ese terreno ocupado por el camino no pertenecía al actor, como sostiene esta parte mientras no se demuestre lo contrario, era natural que en los títulos de propiedad nada se dijera sobre la existencia de servidumbre de paso; y que no bastaba que en unos títulos de propiedad se dijera que la finca estaba libre de servidumbre, para que con ello el titular quisiera constituirse en propietario de todos los caminos que rodean su finca y que el camino no está en el interior de la finca del demandante sino que aun estando fuera como lo está, no le corresponde a éste.

Tercero. Que era cierto el juicio interdictal y su resultado y que el demandado había sostenido que el camino discurre a través de la finca suya y no por la del actor; que en el juicio interdictal consta la declaración prestada por el testigo propuesto de adverso, don Joaquín García Vega, que había sido dueño de la finca del actor hacía treinta y cinco años y que manifiesta; que por fuera de su finca, que es hoy la del demandante, existía una gavia o lo que es lo mismo, que esa gavia que precisamente está entre la finca del actor y el camino, es lincero; también dijo el propio testigo que antes de llegar a la finca había un camino de carros; que el propio Juzgado, con motivo de la diligencia de reconocimiento judicial había hecho constar, entre otros extremos: «... que se llega al hecho cierto, de que el principal destino del camino es el de servidumbre de la finca del demandado—el señor Martín García—... los hechos aparentes así lo confirman»; que por todas estas razones sostenía el demandado que el dicho camino no era del demandante, sino suyo; que había demandado de conciliación al actor para que se allanara a considerar extinguida la servidumbre y se había celebrado sin avenencia; haciendo también constar que el acta notarial acompañada de adverso tenía fecha 2 de abril de 1955, cuando ya tenía el actor la copia de la demanda de conciliación, lo que ponía de manifiesto el deseo de seguir disfrutando lo que no era suyo aun a fuerza de papeles. Cito los fundamentos legales que estimo pertinentes y terminé suplicando se dictara sentencia por la que se desestimase la demanda y se absolviese al demandado de las peticiones de la demanda, con imposición de costas al actor:

RESULTANDO que renunciado por la representación del demandante al traslado de réplica no se dio el de dúplica; y recibido el pleito a prueba, se practicó a instancia de la parte demandante la documental, confesión judicial y testifical; y a instancia del demandado la de confesión, documental y testifical. Y para mejor proveer la de reconocimiento judicial:

RESULTANDO que unidas a los autos las pruebas practicadas y seguido el juicio por sus restantes trámites, se dictó por el Juez de Primera Instancia del Juzgado de Utrera, con fecha 11 de enero de 1956, sentencia por la que declaró que ateniéndose al principio de congruencia que la finca del actor don Teodomiro Martín García, que se describe en la demanda, era libre de toda clase de servidumbre ni de ninguna otra a favor de la limítrofe denominada «La Arboleda», propiedad de don Primitivo Santos García, apercibida a éste se abstenga de perturbar el derecho del demandante; con imposición de costas al señor Santos García:

RESULTANDO que contra la anterior sentencia se interpuso por la representación del demandado don Primitivo Santos García recurso de apelación que fue admitido libremente y en ambos efectos, remitiéndose las actuaciones a la Audiencia Territorial de Sevilla; y sustanciada la alzada por sus trámites, la Sala Segunda de lo Civil de la misma, con fecha 30 de enero de 1957 dictó sentencia por la que revocando la sentencia apelada, absolvió a don Primitivo Santos García de la demanda contra el mismo interpuesta por don Teodomiro Martín García, sobre reclamación relativa a la finca rús-

tica propiedad del demandante que se describe en la misma, sin hacer expreso pronunciamiento de costas en ninguna de las instancias:

RESOLVIENDO que el Procurador don Cristóbal Estevez Alvarez, en nombre de don Pedro María Martín García, ha interpuesto ante este Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia recurrida de calificación por infracción de ley, fundado en los números primero, segundo, tercero y séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los siguientes motivos:

Primero. Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación de los artículos 348, 446 y 530 del Código Civil, así como de las sentencias de 10 de junio de 1904 y 13 de octubre de 1927, alegando que la más somera lectura de la súplica del escrito de demanda basta para llegar al convencimiento de que la única acción aquí ejercitada ha sido la clásica negatoria de servidumbre ya que todas las peticiones contenidas se concretan a solicitar una declaración del predio propiedad del recurrente, según los títulos acompañados y que no han sido impugnados, como absolutamente libre de toda clase de cargas y gravámenes, que no aparecen alegados como existentes por ninguna de las partes y el recurrente no aduce título alguno justificativo de dicha carga. Limitándose a suscitar un problema de dominio de determinada franja de terreno poseída por el recurrente; que si aquí se ha suscitado una cuestión de dominio no lo ha sido por el recurrente que desde hace muchos años posee la porción de terreno sin que nadie le haya negado la posesión; que la demanda se ha limitado a negar la existencia de toda clase de cargas y gravámenes sobre la finca descrita y nadie ha suscitado si existe o no una franja de terreno ocupada indebidamente por el recurrente, cosa que debió haber hecho por vía reconvenzional el señor Santos García; que la cuestión se concreta de la siguiente forma: se presentan unos títulos acreditativos de dominio de una determinada finca que aparece descrita en la misma según ciertos linderos con toda precisión señalados en los mismos y nadie ha negado que dentro de tales linderos sea el recurrente propietario de la expresada finca, ni se ha puesto en duda la legitimidad de tales títulos; que esto admitido la petición se limita a pedir que se declare que dentro de tales linderos no existe servidumbre o gravamen a favor del demandado, ni de ninguna otra persona; que si el recurrente creía tener algún derecho de paso o de cualquier otra clase, debió alegarlo en el momento oportuno y al no haberse hecho por su parte alegación de clase alguna quedaba evidente la procedencia de la acción ejercitada que se contraía a obtener una declaración de libertad del fundo descrito; que el señor Santos García alegó el dominio de una franja de terreno no bien identificada, que es precisamente la que sirve de acceso a la vivienda que el recurrente posee en el interior de la finca de su titularidad y que se encuentra perfecta y ostensiblemente separada de la del señor Santos García por una valla de alambre y espino y un acueducto de fábrica; que por ello ha sido dicho señor el que ha suscitado un problema de propiedad, una excepción de dominio frente a la acción negatoria del recurrente; que para que la excepción de dominio prospere, se exige un doble requisito que el demandado que la excepción, hubiese delimitado debidamente la porción de terreno a que se extendía su pretensión de dominio y que hubiese demostrado debidamente tal propiedad, y basta la simple lectura de la sentencia para comprender que tal doble exigencia ha sido totalmente incumplida; el recurrente no estaba obligado a probar que dentro de los linderos de su título el señor Santos García carecía de todo derecho según doctrina de las sentencias de 19 de febrero de 1887, 31 de marzo de 1902, 10 de junio de 1904 y 13 de octubre de

1927; que de admitirse la tesis del Tribunal de instancia, resultaría que sería suficiente por el demandado alegar el dominio sobre la finca del actor, para que en ningún caso pudiera resolverse en el proceso denegatorio de servidumbre, siendo preciso acudir a la acción reivindicatoria incluso cuando el terreno no hubiese salido de la posesión dominical del actor con clara infracción del artículo 446 del Código Civil que releva en este punto de toda obligación de prueba al poseedor dominical.

Segundo. Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación del artículo 384 del Código Civil y sentencia de 9 de noviembre de 1944; y se alega que la sentencia recurrida parte de la base de que para resolver la cuestión de dominio hubiera sido preciso proceder a la previa medición de ambas fincas colindantes, pero lo cierto es que las fincas están perfectamente deslindadas y según doctrina de esta Sala no es posible proceder a un deslinde, sino a una verdadera reivindicación en la que hubieran debido cumplirse los tres requisitos fundamentales del título, identificación de la cosa reivindicada y posesión de la misma por el demandado, y nada de esto se ha intentado, ni por vía de excepción, ni mediante el ejercicio de la procedente acción reconvenzional, de donde resulta que cualquiera que pudiera ser su derecho de dominio no ha sido aducido en forma y no puede servir de base a la excepción opuesta a la acción negatoria que es la única que se discute.

Tercero. Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación del artículo 1.214 del Código Civil en relación con el 448 del mismo Código legal; alegando que hallándose el recurrente en la posesión a título de dueño de la franja de terreno que pretende el señor Santos García ser de su propiedad, tiene a su favor una presunción iuris tantum, en tanto que no sea destruida por prueba en contrario que no se ha producido de manera eficiente y no era por ello el recurrente quien debía probar dicho dominio sino quien pretendía ser declarase a su favor; y al desconocer la Sala el principio regulador de la carga de la prueba, incidió en las violaciones señaladas.

Cuarto. Fundado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aplicación indebida del artículo 38, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria; y alega que en el penúltimo de los considerandos de la sentencia recurrida se alude a dicho artículo que no tiene aplicación al caso presente puesto que la acción ejercitada no es contradictoria con el, sino perfectamente congruente con los términos de la inscripción registral; que el recurrente no ha pretendido alterar los linderos extendiendo su propiedad más allá de los marcados en el Registro; y finalmente que la libertad de cargas en que funda su acción negatoria, concuerda con el contenido del Registro, ya que en el mismo no aparece inscrita servidumbre alguna a favor del señor Santos García ni de ninguna otra persona o finca.

Quinto. Fundado en el número segundo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega que la acción ejercitada y así se desprende claramente de la súplica del escrito de demanda, no era otra que la denegatoria de servidumbre y la Sala de instancia en el primero de los considerandos sostiene lo contrario pretendiendo que sólo se ha ejercitado una acción declarativa de dominio y en tal sentido desvirtúa toda su argumentación, absolviendo al demandado no de la acción negatoria única ejercitada, sino de una acción declarativa de dominio que no se ha ejercitado.

Sexto. Fundado en el número tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; alegando que como el único problema resuelto es una supuesta acción declarativa de dominio no ejercitada en este pleito, es evidente que el pronuncia-

miento absoluto contenido en la sentencia no se refiere a negación de servidumbre que es la ejercitada y tal pretensión es fundamental, porque el señor Santos García pudiera en lo sucesivo pretender la existencia de una servidumbre de paso a través de la propiedad del recurrente alegando precisamente este fallo absoluto; y

Séptimo. Fundado en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto existe error de hecho que resulta de documentos auténticos demostrativos de la equivocación del juzgador; y alega que el error consiste en desconocer que entre las fincas de ambos litigantes existe una clara delimitación y deslinde mediante una valla de alambre y obra de fábrica que con toda claridad las separa, según resulta de la copia autorizada del acta notarial acompañada a la demanda; que el contenido de este acta demuestra que el camino al internarse en la huerta el Capellán está separado de la finca del señor Santos García por empalizada de alambre en un gran trozo y donde ésta termina sin que se aprecie separación para paso alguno; por una acequia que tiene aproximadamente cuarenta y seis metros de longitud y de cuarenta a cincuenta centímetros de altura; a continuación de ella vuelve a aparecer la cerca de alambre de espino, llegando la misma cerca a la finca de don Francisco Gómez Alroba por donde continúa terminando el camino... en la casa de la «Huerta del Capellán»; que finalmente, nada hay que añadir a los claros razonamientos que aparecen reflejados en el acta notarial señalada como documento auténtico a los fines de este motivo y de ello resulta probado que la franja de terreno discutida se halla situada dentro de los límites asignados por los títulos de propiedad del recurrente, lo que además aparece registralmente inscrita como libre de cargas, de donde se sigue la procedencia de la acción negatoria ejercitada;

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Manuel Taboada Roca;

CONSIDERANDO que en el primer motivo del recurso, que se formula al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la violación de lo establecido en el artículo 348 del Código Civil, en relación con los 446 y 530 del mismo Código, y de la doctrina legal contenida, entre otras, en las sentencias de 10 de junio de 1904 y 13 de octubre de 1927, por cuanto, ejercitándose en la demanda la clásica acción negatoria de servidumbre, y acompañándose a ella los títulos de propiedad que la proclaman como absolutamente libre de cargas y gravámenes, es visto que, al no aducir el demandado título alguno de la servidumbre que invoca ni impugnar los de diverso presentados, resultaba evidente, a juicio del recurrente, que había que declarar la procedencia de la acción ejercitada, que se contraía exclusivamente a obtener una declaración de libertad del fundo, y por lo tanto, al no proclamarlo así la sentencia recurrida, infringe por violación aquellos preceptos y doctrina legal concordante, que el recurrente cita;

CONSIDERANDO que, efectivamente y como dicho recurrente afirma, en la demanda se súplica sentencia por la que se declara que la finca rústica propiedad del demandante, conocida con el nombre de «Pesadillas» o «El Capellán», es libre de toda servidumbre de paso ni de ninguna especie, a favor de la finca limítrofe, propiedad del demandado y denominada «La Arboleda» y se condene a éste a que pase por tal declaración apercibiéndole a que en lo sucesivo se abstenga de perturbar el derecho del actor por el uso de supuestas servidumbres; y con tal demanda se acompañó copia fehaciente de la escritura de adquisición del predio de dicho demandante, que figura inscrito en el Registro de la Propiedad, y que no aparece gravado con carga alguna, y si ofrece límites determinados con las fincas contiguas;

CONSIDERANDO que por consiguiente, si el demandado pretendía tener algún derecho de paso o de cualquier otra especie sobre aquella finca, debió alegarlo y probarlo, ya que la propiedad se presume libre de gravámenes, y al que los invoque corresponde la prueba cumplida de su existencia; y como el demandado no probó que sobre el predio del demandante, tal como se describía en sus títulos de dominio, tuviese derecho a pasar para el aprovechamiento de su finca «La Arboleda», resulta evidente que la sentencia recurrida, al no declarar que la finca del demandante está libre de servidumbres, como éste solicitaba, viola el artículo 348 del Código Civil, que proclama la libertad de los fundos, el 446 del mismo Código legal, que otorga a todo poseedor el derecho de ser amparado contra quienes perturben su posesión, y el 530 que, aunque autoriza el establecimiento de servidumbres sobre y en provecho de los fundos, no las presume establecidas en favor de nadie:

CONSIDERANDO que en el tercer motivo del recurso, se denuncia la violación del artículo 1.214 del Código Civil, que, a juicio del recurrente, comete la sentencia recurrida, invirtiendo la carga de la prueba, y trasladándola al demandante, que ya había demostrado que era dueño del predio, con los títulos acompañados a su demanda, y que no le había sido discutido por el demandado:

CONSIDERANDO que no habiendo alegado el demandado que el actor no fuese dueño de la finca que se deslindaba en los títulos acompañados a la demanda, no tenía el demandante la carga de probar ese dominio que no se le negaba, sino que, el demandado era el que tenía que probar que, a pesar de aquel dominio él tenía algún título legal que amparaba su derecho de paso por sobre la finca del demandante; y, en este sentido, claro está, la sentencia, al desconocer ese principio que proclama el Código Civil en el artículo 1.214, lo viola, aplicándolo erróneamente:

CONSIDERANDO que en el quinto motivo del recurso, se atribuye a la sentencia recurrida, falta de congruencia con las pretensiones oportunamente aducidas en la demanda, y se articula al amparo del número segundo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque, si en dicha demanda, dice el recurrente, se ejercitaba una acción negatoria de servidumbre, no se podía absolver al demandado, de una acción declarativa de dominio, que nadie había puesto en ejercicio;

CONSIDERANDO que, efectivamente, habiéndose ejercitado en la demanda, una acción negatoria de servidumbre, sobre el terreno cuyo dominio amparaban los títulos que representaban, y que nadie le discutía, la sentencia, para no poder ser tildada de incongruente, tenía que resolver sobre aquella acción, estimándola si creía que había probado el dominio del fundo cuya libertad invocaba, o desestimándola si entendía lo contrario; todo, menos absolver de una acción declarativa de dominio, que no se había ejercitado; y sin que pueda estimarse que por no reflejarse en el fallo el motivo de la absolución, no existía incongruencia, si los considerandos que predeterminan tal fallo, razonan esa absolución;

CONSIDERANDO que, estimándose estos motivos, se hace innecesario examinar los demás alegados, que si prosperasen conducirían al mismo fin de casar la sentencia recurrida;

FALLAMOS que debemos estimar y estimamos el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Teodomiro Martín García contra la sentencia dictada por la excelentísima Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia de Sevilla el día 30 de enero de 1957, en los autos de mayor cuantía seguidos en el Juzgado de Utrera a instancia de dicho don Teodomiro, contra don Primitivo Santos García, sobre acción negatoria de servidumbre, por los motivos primero, tercero y

quinto del recurso; y, en su consecuencia, casamos y anulamos dicha sentencia, sin hacer declaración especial sobre las costas del recurso; y librese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Serrada.—Francisco Bonet, Antonio V. Tutor.—Mariano Gimeno.—Manuel Taboada Roca (rubricados).

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Manuel Taboada Roca, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.—Emilio Gómez Vela.

En la villa de Madrid a 25 de marzo de 1961; en los recursos de nulidad que ante nos penden, interpuestos, uno, por doña Martina Murúa Murúa, viuda, Profesora mercantil y vecina de Eibar, y otro, por doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Gabilondo, viuda, sin profesión especial; don Lorenzo Sarasqueta Aguirregomezcorta, industrial, y don Miguel Sarasqueta Aguirregomezcorta, industrial; los tres vecinos de Eibar e intervinendo, además de por sí, individualmente como personas físicas, en el de socios gestores de la Sociedad Mercantil Regular Colectiva «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta», que utiliza el nombre comercial de «Viuda e Hijos de J. J. Sarasqueta», contra el laudo dictado en 18 de abril de 1959 en arbitraje de equidad por el árbitro don José María Caballero y Aldama, para dirimir diferencias surgidas con motivo de la disolución de la sociedad conyugal y partición de bienes al fallecimiento de don Juan Segundo Sarasqueta Aguirregomezcorta; habiendo comparecido ante este Tribunal Supremo la primera recurrente señora Murúa, representada por el Procurador don Manuel García Gómez y defendida por el Letrado don Pedro Rodríguez Sahagún, que fué sustituido en el acto de la vista por su compañero don Arsenio Sánchez Moreno; y los otros recurrentes, representados y defendidos, respectivamente, por el Procurador don Bienvenido Moreno Rodríguez y el Letrado don Isidoro Sánchez Toves:

RESULTANDO que ante el Notario de Eibar don Juan Ignacio Gomez y Ozamiz comparecieron con fecha 18 de febrero de 1958, doña Martina Murúa Murúa, don Lorenzo y don Miguel Sarasqueta Aguirregomezcorta, intervinendo la primera por sí, el segundo en representación como mandatario verbal de doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Gabilondo, y además el propio don Lorenzo Sarasqueta, así como don Miguel Sarasqueta, en su calidad de Gerente de la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», que utiliza el nombre comercial de «Viuda e Hijos de J. J. Sarasqueta», otorgando escritura de compromiso, exponiendo en síntesis:

Primero. Que con fecha 14 de octubre de 1956 falleció en desgraciado accidente don Juan Segundo Sarasqueta Aguirregomezcorta, sin dejar testamento; que solicitada la oportuna declaración de herederos y no existiendo descendientes, el Juzgado de Vergara declaró heredera a doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Gabilondo, madre del finado, sin perjuicio de la cuota viudal usufructuaria que correspondía a su viuda y que al no existir descendencia se señalaba en la tercera parte de la herencia en usufructo.

Segundo. Que al tratarse de la partición de los bienes, tanto al intentar concretar éstos como en relación a la liquidación previa de la sociedad de gananciales, han surgido diferencias entre los

interesados, diferencias que de mutuo acuerdo han decidido sean sometidas al arbitraje del Letrado don José María Caballero Aldama, a cuyo efecto otorgan por este acto la correspondiente escritura de compromiso, en cuya virtud acuerdan: I. Doña Juana Josefa Aguirregomezcorta, doña Martina Murúa, don Lorenzo y don Miguel Sarasqueta, todos ellos mayores de edad, sin profesión especial las dos primeras e industriales los últimos, vecinos y domiciliados en la villa de Eibar se someten en cuanto a las diferencias surgidas entre ellos en relación a la liquidación de la sociedad de gananciales formada por doña Martina Murúa y el fallecido don Juan Segundo Sarasqueta, al laudo que dicte don José María Caballero Aldama, mayor de edad, Abogado, vecino y domiciliado en Bilbao, calle alameda de Recalde, 12 sexto. II. El objeto sobre el que ha de fallar en arbitraje de equidad, o sea, según su leal saber y entender el árbitro nombrado, es el que sigue: Liquidación, división y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento de don Juan Segundo Sarasqueta, con previa liquidación de la sociedad de gananciales, constituida por el fallecido y doña Martina Murúa. III. A efectos de concretar el asunto sobre el cual se lleva a cabo el arbitraje, el árbitro llevará a cabo las siguientes operaciones: Primera. Formación del balance-inventario de la sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», que utiliza el nombre comercial de «Viuda e Hijos de J. J. Sarasqueta», a la fecha en que contrajeron matrimonio don Juan Segundo Sarasqueta y doña Martina Murúa. Segunda. Balance-inventario en la fecha de fallecimiento de don Juan Segundo Sarasqueta, que reflejara la situación económica de la antes mencionada Sociedad. Tercera. Determinación asimismo del punto de vista económico de la existencia de cualesquiera otros bienes que pudieran pertenecer al fallecido, tanto en el momento de su matrimonio como en la fecha de su fallecimiento. Cuarta. Determinación por el árbitro según su leal saber y entender, de los factores que han producido la diferencia económica resultante de los anteriores apartados, a efectos de concretar en ellos el concepto de gananciales de toda o parte de tal diferencia. Quinta. Corresponderá al libre criterio del árbitro la determinación de todos los factores de valoración, no contables, que puedan existir entre las dos fechas mencionadas de matrimonio y fallecimiento; todo ello para la exacta determinación de la cifra de valor de los bienes constitutivos de la sociedad de gananciales o particulares de los conyuges en el momento de fallecimiento. Sexta. El árbitro deberá, asimismo, examinar las cuentas corrientes y movimiento que ha podido tener la que figuraba particularmente a nombre de don Juan Segundo Sarasqueta, para asimismo tener en cuenta o no sus cifras en relación a la formación del balance-inventario al que se han referido los artículos anteriores. IV. A efectos de obtener los datos necesarios para llegar a la cifra concreta de valoración de los bienes existentes a la fecha del fallecimiento de don Juan Segundo Sarasqueta y determinar el carácter de los mismos, el árbitro gozará de la máxima libertad oyendo para formarlas, a las partes interesadas, y auxiliándose de cuantas personas considere convenientes tanto para examen de la contabilidad como para llevar a cabo las valoraciones. V. Determinadas por el árbitro las cifras totales y establecidas desde el punto de vista matemático, las cantidades que a cada parte correspondan, fijando al efecto una cifra en propiedad que sirva de compensación al tercio que en disfrute corresponde en herencia a la viuda, el árbitro llevará a cabo la adjudicación de los bienes, teniendo en cuenta, dentro de su decisión a este respecto, los siguientes principios, en los que las partes están de acuerdo: a) En todo caso

la participación que en la sociedad correspondía al finado y cualquiera que fuere el concepto total o parcial que de privativo o ganancial pudiera corresponder a tales bienes, será adjudicado a doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Gabilondo, compensándose a metálico, de acuerdo con la valoración establecida, a doña Martina Murúa. b) Asimismo será adjudicado a doña Juana Josefa Aguirregomezcorta, cualquiera que fuere el concepto que pudieran merecer legalmente, aquella parte de los inmuebles comunes que, aun no figurando oficial o extrajudicialmente como parte integrante del capital de la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», que utiliza el nombre comercial de «Viuda e Hijos de J. J. Sarasqueta», están afectos al uso de su industria. Corresponderá al árbitro, dentro de su leal saber y entender, determinar, previo el examen y asesoramientos que crea pertinentes, qué partes de los referidos inmuebles son los que han de considerarse como afectos a la industria. En relación a tales bienes, asimismo establecerá el importe de su compensación a metálico o en otros bienes inmuebles c) En lo que se refiere a los restantes bienes inmuebles, el árbitro decidirá, si lo considera posible, su división entre los interesados por adjudicación de los mismos bienes, compensando las posibles diferencias a metálico, o bien, si por existir dificultades que considere insuperables, deben sacarse los mismos a pública subasta, repartiéndose su importe en las proporciones que en su caso hayan establecido. d) Dentro de la determinación de las cifras a repartir, se reconoce al árbitro la posibilidad de modificarlas a su libre arbitrio, si entendiere que cualquiera de las partes ha resultado perjudicada, por actuación de la otra, en razón de la marcha y forma de llevar el negocio, a partir de la fecha del fallecimiento. Asimismo podrá modificar la cifra, si entendiere que cualquiera de las dos partes ha ocultado o hecho desaparecer bienes, que debieran figurar en el inventario de los existentes en el momento del fallecimiento. VI. Las cantidades a metálico con que han de ser compensadas la adjudicación de participación en la sociedad y bienes inmuebles, habrán de ser satisfechas en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha en que el laudo se otorgue. El laudo habrá de ser dictado en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de firma de esta escritura de compromiso, si bien se reconoce al árbitro el derecho a prorrogarla por dos meses más, si observare no puede dar término dentro de tal plazo a la tarea encomendada, correspondiendo a su libre arbitrio el determinar si se da o no la mencionada circunstancia. VII. Dado que el arbitraje es de equidad, corresponderá al árbitro el determinar la forma y manera en que han de ser oídas las partes, siendo a él, por tanto, a quien corresponde concretar este aspecto del procedimiento. El laudo será dictado en Eibar, donde asimismo se desarrollara el arbitraje. Requerido el Notario autorizante de la escritura para que notificara al árbitro su designación a los efectos pertinentes el Notario mencionado hace constar por medio de diligencia haber practicado tal notificación, manifestando el árbitro que se daba por notificado y enterado y aceptaba su nombramiento de árbitro a todos los efectos legales.

RESULTANDO que ante el Notario de Eibar, don Juan Ignacio Gomaza Ozamiz, comparecieron con fecha 17 de junio de 1958 todos los otorgantes de la escritura de compromiso de que ha quedado hecho mérito, exponiendo que en escritura de fecha 18 de febrero de 1958, otorgaron y formalizaron un compromiso arbitral para resolver diferentes cuestiones suscitadas entre los mismos, designando como árbitro a don José María Caballero Aldama, Letrado de Bilbao, a quien se le fijó plazo de dos meses a partir de la fecha

de la firma de aquella escritura, prorrogable, a su voluntad, por otros dos meses más; que para facilitar la misión encomendada al citado árbitro, han convenido renovar el compromiso de aquella escritura y concederle un nuevo plazo, a este objeto renovaban y ratificaban el otorgamiento del compromiso otorgado en la referida y mentada escritura de fecha 18 de febrero de 1958, el cual compromiso subsiste en toda su integridad en los mismos términos en aquella escritura estipulados, salvo en lo que concierne al plazo fijado al árbitro para dictar el laudo, que se prorrogó en este acto, concediéndole a dicho árbitro don José María Caballero Aldama, un nuevo plazo de cuatro meses, que comenzaría a contarse desde el mismo día 19 de junio de 1958.

RESULTANDO que ante el Notario don Julián María Ansuátegui y Alday, en sustitución de su compañero don Juan Ignacio Gomaza y Ozamiz, comparecieron con fecha 16 de octubre de 1958, los otorgantes de la escritura de compromiso de que se hizo relación, exponiendo que renovaban y ratificaban el otorgamiento del compromiso otorgado en la referida escritura, el cual compromiso subsistía en toda su integridad en los mismos términos en aquella escritura estipulados, salvo en lo que concierne al plazo fijado al árbitro para dictar el laudo, que fué prorrogado por cuatro meses más, según escritura de 17 de junio de 1958; y en virtud del presente otorgamiento, concedían los comparecientes al árbitro don José María Caballero y Aldama un nuevo plazo de tres meses, a contar desde el mismo día 19 de octubre de 1958, para dictar el laudo.

RESULTANDO que con fecha 14 de enero de 1959, ante el propio Notario don Juan Ignacio Gomaza y Ozamiz, todos los otorgantes de la escritura de compromiso otorgaron nueva escritura de prórroga por la que renovaron y ratificaron el otorgamiento del compromiso otorgado, el cual compromiso subsiste en toda su integridad en los mismos términos en lo que la escritura estipulados, salvo en lo que concierne al plazo fijado al árbitro para dictar el laudo, que fué prorrogado hasta el día 19 de enero de 1959, según escrituras de 17 de julio y 16 de octubre de 1958, y que en virtud del presente otorgamiento concedían al árbitro don José María Caballero Aldama un nuevo plazo de dos meses, a contar desde el día 19 de enero de 1959.

RESULTANDO que ante el Notario de Eibar don Juan Ignacio Gomaza y Ozamiz comparecieron con fecha 17 de marzo de 1959 los propios otorgantes de la escritura de compromiso, otorgando nueva escritura de prórroga, por la que renovaron y ratificaron el otorgamiento de compromiso, el cual compromiso subsiste en toda su integridad en los mismos términos estipulados, salvo en lo que concierne al plazo fijado al árbitro para dictar el laudo, que fué prorrogado hasta el día 19 de marzo de 1959, cuyas prórrogas son asimismo ratificadas en este acto; y que en virtud del presente otorgamiento concedían al árbitro don José María Caballero y Aldama un nuevo plazo de un mes, a contar desde el citado día 19 de marzo de 1959.

RESULTANDO que con fecha 15 de abril de 1959 compareció ante el Notario don Julián María Ansuátegui Alday, sustituto y para el protocolo del Notario de Eibar don Juan Ignacio Gomaza y Ozamiz, el árbitro designado don José María Caballero Aldama, otorgando escritura a la que incorporó el laudo de equidad dictado por el mismo, exponiendo sustancialmente: I. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Eibar don Juan Ignacio Gomaza, en 18 de febrero de 1958, se designó al compareciente de común acuerdo por doña Martina Murúa y Murúa, y don Lorenzo y don Miguel Sarasqueta Aguirregomezcorta, la primera por sí, el segundo en representación,

como mandatario verbal de doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Gabilondo, y además, así como don Miguel Sarasqueta como Gerente de la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», para dirimir las diferencias entre ellos surgidas en relación a la disolución de la sociedad conyugal y partición de bienes relictos por don Juan José Sarasqueta Aguirregomezcorta, fallecido el 13 de octubre de 1956 sin haber otorgado testamento y del que fué declarada heredera su madre doña Juana Josefa Aguirregomezcorta, sin perjuicio de la cuota legal que, en usufructo, corresponde a su viuda, doña Martina Murúa. II. El fundamental objeto de este arbitraje de equidad consiste en fallar, sobre la liquidación, división y adjudicación de los referidos bienes relictos, con la liquidación previa de la sociedad de gananciales constituida por el difunto y doña Martina Murúa; que en la escritura de compromiso, este objeto principal queda concretado en una serie de operaciones que han de llevarse a cabo, y que consignan unos principios, en los que los otorgantes están de acuerdo, que han de presidir la decisión que se adopte. III. En el presente laudo, que se dicta dentro del plazo sucesivamente prorrogado, se ha dado a las partes oportunidad de ser oídas, lo que han realizado, por medio de sus representantes, mediante escritos de alegaciones, contestación y conclusiones, a los que unieron los informes y documentos que juzgaron precisos para probar los hechos alegados y para defender las pretensiones mantenidas. La disolución de la sociedad conyugal establecida por el matrimonio contraído entre don Juan José Sarasqueta y doña Martina Murúa y la consecuente determinación de su haber ganancial, por su orden al ser previa y determinante de la adjudicación de bienes relictos, y por importancia, al tratarse del primordial motivo de discrepancia entre los interesados, es la primera cuestión que ha de resolverse en el presente laudo, y que, una vez resuelta, conduce directamente a la liquidación, división y adjudicación de los bienes que han de constituir la herencia del causante, por lo cual ambas cuestiones serán tratadas conjuntamente. En cuanto a cuáles sean los bienes relictos por don Juan José Sarasqueta, no existe discrepancia entre las partes, pues ambas coinciden en que tales bienes son, la participación de una tercera parte en la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», y otra participación idéntica en los inmuebles sitos en las calles de Ibarrecruz y Bidabarrieta, de Eibar, pero, por lo que se refiere a la naturaleza, ganancial o privativa, de los mismos, difieren totalmente en su apreciación, pues mientras, de un lado, la representación de doña Martina Murúa sostiene que todos aquellos bienes merecen la consideración de gananciales, de otro, la de doña Juana Josefa Aguirregomezcorta mantiene que la indicada participación social y la finca de la calle de Ibarrecruz, son privativas del causante. Las razones que por una y otra parte se exponen, así como las pruebas por las que tratan de acreditarlas, constan en los escritos, documentos e informes que a su tiempo presentaron y de los que se deja hecha mención, pero que, al ser conocidas por los interesados, no precisan de una detallada exposición, por lo que sólo en síntesis se hará referencia a ellas, al resolverse esta materia, para cuya solución, siguiendo también el método de las partes, se tratará por separado de la participación social y de los inmuebles.

Primero. Participación social de un tercio en la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.» La representación de doña Martina Murúa, aun admitiendo que tal participación era bien propio del causante, niega que tuviera valor alguno en la fecha del matrimonio en 6 de noviembre de 1944, y señalando a la totalidad de la empresa un valor de

20.282.550 pesetas con 75 céntimos el día de la defunción del causante, en 14 de octubre de 1955, considera que, de su tercera parte 6.760.850 pesetas y 25 céntimos ha de partirse para la determinación del haber ganancial y usufructo viudal. Por parte de la heredera doña Juana Aguirregomezcoita se sostiene que la indicada participación es privativa del difunto al haberla adquirido con anterioridad al matrimonio, consignando la tercera parte del capital de 500.000 pesetas a efectos de valoración inicial, y valorando el negocio en 31 de diciembre de 1956, en la suma de 11.642.443 pesetas con un céntimo, cantidad que ha de servir de base para la distribución. La fundamental discrepancia entre ambas tesis, su importancia para una equitativa distribución, y el que la materia, además de ser confusa al no venir debidamente acreditada en libros y documentos legalmente llevados, es ajena a la ciencia del árbitro, ha decidido solicitar el informe técnico de don José Luis Sarasqueta, Director de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao, informe que, por lo razonado y perfecto, ha servido de base para adoptar esta decisión, adoptando, en general, sus cifras y conclusiones, y del que se hará referencia someramente y en lo que sea preciso, sin entrar en sus detalles y consideraciones, pues, para que las partes tengan conocimiento completo del mismo, les serán entregadas copias del mismo, que en el citado informe, basándose en documentos aportados y lógicas deducciones, se determina el balance-inventario de la sociedad en 6 de noviembre de 1944, partiendo del que, como anexo, figura en el escrito dirigido a la Delegación de Trabajo de Guipúzcoa en 18 de abril de 1944, si bien incluyendo en su activo las partidas «Inmuebles» y «maquinaria», en sus respectivos importes de 149.000 y 189.900 pesetas, resultantes de los títulos de su adquisición y se concluye señalando como capital líquido de la empresa en la indicada fecha, la suma de 497.640 pesetas y 98 céntimos, de acuerdo con el detalle siguiente: Balance-inventario en 6 de noviembre de 1944: Activo: 779 escopetas terminadas, 218.120; 517 escopetas en depósito en poder de clientes, 147.005; 711 escopetas en curso de fabricación, 97.547; clientes deudores, 6.128.000, digo, 6.128 con 35; utillaje, mobiliario, etc., 72.314 con 70; inmuebles, 149.000; maquinaria, 189.000. Suma total, 880.015 pesetas con cinco céntimos. Pasivo: Clientes acreedores, 32.371 con 85 Banco de San Sebastián, 368.002 con 22. Suma total, 400.374 con siete. Total del activo, 880.015 con cinco. Total del pasivo, 400.374 con siete. Capital líquido en 6 de noviembre de 1944, 479.640 con 98; que se rectifica el referido balance en dos extremos. En primer lugar, suprimiendo de su activo la suma de 149.000 pesetas, correspondiente a la partida «inmuebles», pues si bien estos inmuebles fueron adquiridos con anterioridad al matrimonio y este extremo se tendrá en cuenta en el momento de su distribución, no se hallaban afectados al negocio en la referida fecha de 6 de noviembre de 1944, puesto que es en 5 de marzo de 1947, según queda acreditado por oficio de la Delegación de Industria de Guipúzcoa, cuando por ésta se autorizó a que la industria, que estaba establecida en la calle de Víctor Sarasqueta, número 8, de Eibar, se trasladase al edificio de la calle de Ibarra-cruz. En segundo término, se incluye como pasivo deducible en la cuenta «Banco de San Sebastián», la suma de 501.669 con 29 pesetas, tal como consta en el balance de 31 de marzo de 1944 y no la de 368.002 con 22 pesetas, cantidad correspondiente a deudas particulares y no de la sociedad. Todo ello hace que el balance a 6 de noviembre de 1944 arroje un capital líquido de 196.973 pesetas y 91 céntimos, cantidad que, en definitiva, ha de servir a ulteriores efectos. El balance-inventario al 14 de octubre de 1956 se practica en el informe, mediante el examen

detallado de los libros de contabilidad, aunque con variantes referidas a las partes «inmuebles», gastos y productos de inmuebles», gastos de instalación de pisos», «amortizaciones», cantidades retiradas por los socios», etc., y «gastos boda Miguel Sarasqueta», con las que se rectifican los balances-inventarios de los ejercicios de 1949 a 1955 inclusive, procediéndose a la estimación material de la empresa en 31 de diciembre de 1955, en la suma de 5.873.601 pesetas y 97 céntimos, según el siguiente detalle: Beneficios capitalizados... 944.659 pesetas y 38 céntimos. Inmuebles afectos al negocio, 325.000. Capital según balance, 8.317.974 con 17. Suma, 9.587.633 con 55. Deducir: Inmuebles no afectos al negocio y Sociedad Tiro Pichón, 3.725.651 y 58. Valor material en 31 de diciembre de 1955, 5.863.981 con 97; que en las citadas cifras se advierte un pequeño error consistente en deducir la totalidad del valor de los inmuebles, siendo así que su rúbrica se refiere tan sólo a los inmuebles no afectos al negocio, lo que hace que únicamente proceda deducir la suma de esta parte no afectada, que asciende a 3.388.651 con 58 pesetas y, consiguientemente, aquel valor material ha de quedar incrementado en la diferencia, o sea, en 325.000 pesetas, que es precisamente el valor de la parte del inmueble afecta al negocio, con lo cual el valor material de la empresa a la referida fecha asciende a la cantidad de pesetas 6.188.981 con 97; que para actualizar este valor material el 14 de octubre de 1956, día en que tuvo lugar la defunción del causante, se le suman 1.207.794 con 25 pesetas, beneficio calculado desde 1 de enero de 1956 hasta aquel día, cantidad que se deriva de la media de beneficios obtenida en los cinco últimos ejercicios en la proporción que conviene a los días transcurridos entre ambas fechas; no obstante, en este cálculo teórico no puede ser conforme con la realidad, sin duda porque el informante, al carecer de suficientes elementos de juicio, ha tenido que acudir a aquel cálculo promediado, pues la propia representación de doña Josefa Aguirregomezcoita atribuye al negocio, para el año 1956, un valor de 11.642.443 pesetas y un céntimo, del que si deducimos el importe de la parte de los inmuebles que no están afectos a la industria (3.388.651 pesetas 58 céntimos), queda como tal valor la suma de 8.253.791 pesetas 43 céntimos, y, consiguientemente, para actualizar el repetido valor el día de la defunción del causante, no podemos aceptar la cifra de 1.207.794 con 25 pesetas, sino la diferencia existente entre los 6.188.981 pesetas con 97 céntimos (valor a 31 de diciembre de 1955), y 8.253.791 con 43 pesetas (valor al 31 de diciembre de 1956), es decir, que al indicado valor de la empresa en 1955, y para actualizarle a 1956, le añadiremos la cantidad de 2.064.809 con 46 pesetas, con lo cual el valor tangible de la sociedad en 14 de octubre de 1956 lo fijamos en la suma de 8.253.791 pesetas y 43 céntimos, con lo cual el indicado valor viene a coincidir con el señalado por doña Josefa Aguirregomezcoita, valor que definitivamente se acepta. Se sostiene en el informe, con fundadas razones, que, además de estos valores materiales o tangibles, existe en toda empresa un valor indivisible o inmaterial, incluso tratándose de negocios deficitarios, por lo que el valor inmaterial de la sociedad en 1956 está compuesto por el que tenía en 1944, más el creado a partir de esta última fecha. Este valor inmaterial al año de 1944, obtenido por reparto proporcional entre las masas de capital inicial y final, y teniendo en cuenta la desvalorización monetaria y la reducción por depreciación de las cuentas sujetas a amortización, se fija en el informe para aquel año en 1.287.426 pesetas 84 céntimos; ahora bien, como en esta cifra interviene como uno de sus factores la cantidad de 1.638.336 pesetas y 25 céntimos, resultante de multiplicar

por el coeficiente 3,25 el capital líquido de la empresa en la referida época, y siendo así que se ha señalado dicho capital en la suma de 196.973 pesetas 91 céntimos, aquel factor queda reducido a la cantidad de 633.348 pesetas y 16 céntimos, de la que restando el importe del segundo factor, «Deducción por amortización» (400.909 con 41 pesetas) da como resultado un valor inmaterial de 232.438 pesetas con 75 céntimos. Para determinar este valor inmaterial en 14 de octubre de 1956, tras un concienzudo examen, se consideran ocho criterios distintos, y por el árbitro se adopta el señalado con el número 3 (valoración según Stockwell) al constituir, de modo aproximado, el término medio entre todos ellos, criterio que arroja un valor inmaterial, en la citada fecha de 4.516.740 pesetas y 30 céntimos. Como resumen de lo expuesto se fija el valor total de la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», en 6 de noviembre de 1944 y 14 de octubre de 1956, del modo siguiente: Valor a 6 de noviembre de 1944: Valor material, 196.973 pesetas y 91 céntimos. Valor inmaterial, 292.432 con 75 pesetas. Valor total, 489.412 con 66 pesetas. Valor a 14 de octubre de 1956: Valor material, 8.253.791 con 43 pesetas. Valor inmaterial, 4.516.740 con 30 pesetas. Valor total, 12.770.531 con 73 pesetas, que una vez obtenidas las anteriores cifras, y para proceder a la liquidación de la sociedad conyugal, y consiguiente partición hereditaria, por lo que a la participación social en «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.» exclusivamente se refiere, se ha de tener presente, de un lado, que la indicada participación un tercio del total, es bien privativa del causante, como así consta debidamente acreditado, por lo que el valor de esta tercera parte al tiempo de celebrar el matrimonio, ha de deducirse del caudal; relicto al objeto de determinar el haber conyugal; y de otro, que el causante era acreedor de la Sociedad en 31 de diciembre de 1955, por la suma de 507.764 pesetas y 16 céntimos, cantidad que corresponde a la sociedad conyugal. Con estos antecedentes se señalará la cantidad que a doña Martina Murria corresponde percibir en metálico por los distintos conceptos, sin que haya precisión de fijar lo que a la herencia corresponda, salvo para determinar el usufructo viudal, dado que a esta herencia ha de adjudicarse íntegramente la indicada participación social con la única obligación de abonar la cantidad resultante. Los anteriormente referidos conceptos, por los que, doña Martina Murria es acreedora de la cantidad que resulta, son: a) La mitad del haber de la sociedad de gananciales; b) El usufructo viudal sobre la tercera parte del remanente hereditario, de conformidad con lo que se establezca en la legislación vigente el día de causarse la herencia, capitalizado al 50 por 100; y c) El interés del 15 por 100 beneficio normal en la clase de empresa que nos ocupa, aplicado sobre la suma de los dos anteriores conceptos durante el término de dos años y medio transcurridos desde la fecha de la defunción a la del presunto caudal; por lo expuesto se practican las operaciones siguientes. Caudal relicto: Primero Tercera parte del valor total de «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, Sociedad Regular Colectiva», en 14 de octubre de 1956, 4.256.843 pesetas y 91 céntimos. Segundo Crédito del causante contra dicha Sociedad, 507.764 con 16. Total activo relicto, 4.764.608 pesetas y siete céntimos. A deducir: La tercera parte del valor total de la empresa en 6 de noviembre de 1944 al tratarse de bien propio del causante, 183.037 pesetas y 55 céntimos. Remanente ganancial, 4.601.470 pesetas y 52 céntimos. Mitad de ganancias, 2.300.735 pesetas y 26 céntimos. Diferencia: Primero Mitad de ganancias, 2.300.735 con 26 pesetas. Segundo Capital privativo, 163.127 pesetas con 55 céntimos. Remanente hereditario, 2.463.872 pesetas

con 81 céntimos. Usufructo legal: 50 por 100 de la tercera parte del remanente hereditario, 410.645 pesetas con 46 céntimos. Corresponde percibir a doña Martina Murua Murua: Primero. Por su mitad de gananciales, 2.300.735 pesetas con 26 céntimos. Segundo. Por su usufructo capitalizado, 410.645 pesetas con 46 céntimos. Tercero. Por intereses, el 15 por 100 durante dos años y medio, sobre la suma de los dos anteriores conceptos, 1.016.767 pesetas y 76 céntimos. Total a percibir por doña Martina Murua en metálico por los anteriores conceptos, 3.728.148 pesetas y 48 céntimos; que la cantidad anteriormente señalada corresponde a doña Martina Murua en todo caso, pero en el presente, se da la especial circunstancia de que esta señora, lo que no es corriente, ha dedicado de modo intenso su actividad al negocio del que derivan las indicadas cifras, extremo por el cual se estima justo y equitativo, máxime teniendo en cuenta que con el percibo de dicha suma queda desligada de un negocio a cuya actual prosperidad contribuyó con su continua labor, que se le asigne un premio de afecto que se cifra en el 10 por 100 de aquella cantidad. Con esta última consideración, se determina de modo definitivo la cantidad a percibir en metálico por doña Martina Murua Murua, por lo que se refiere a sus derechos e intereses en la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, Sociedad Regular Colectiva», en la suma de 4.100.963 pesetas con 32 céntimos. Segundo, inmuebles. Como se dijo, se trata de las fincas sitas en las calles de Ibarra-cruz y Bidebarrieta, de Eibar, cuya tercera parte integra el caudal relicto por don Juan José Sarasqueta. La división de esta participación, no sólo porque en ello, y en principio, se muestran de acuerdo las partes, sino porque, además, se evitan así largos y costosos problemas de valoración se verificará teniendo en cuenta la extensión superficial, adjudicando a doña Martina Murua en metros cuadrados lo que le corresponde por sus derechos a la mitad de gananciales y al usufructo legal capitalizado al 50 por 100 sobre la tercera parte del remanente hereditario, y situando la extensión resultante en pies o locales no destinados al uso de la industria. Asimismo, se estima con respecto a estos bienes, la existencia de una parte privativa del causante, si bien no se considera como tal más que la extensión superficial del terreno y de los tres pisos a que hace referencia la escritura de compra de 7 de diciembre de 1940, pues lo en aquella época edificado, es decir, la construcción entonces existente, carece de importancia si se la relaciona con lo construido posteriormente durante el matrimonio; su valor queda en gran parte compensado por el hecho de que doña Martina Murua ha transigido cediendo en su derecho a que se le adjudicara parte de la finca ocupada por la empresa con el consiguiente e importante beneficio en favor del negocio y, en su consecuencia, de la herencia, y, además, porque si al hacer la adjudicación en favor de doña Martina Murua de pisos o locales, quedara alguna extensión sobrante en su favor que no pueda situarse íntegramente en una vivienda, este sobrante quedará en favor de la herencia, con lo que al mismo tiempo se evitan enojosas incidencias. Una vez comprobada la extensión superficial de ambas fincas, se admite la tesis de doña Martina Murua en lo que hace referencia a los porcentajes de mayor valor correspondiente a parte de ellas; así se estima que procede, no sólo en equidad, sino también en justicia, ya que es indudable la diferencia de valor en favor de aquella parte que ha de quedar adjudicada a la herencia, pero esta apreciación se hace con la salvedad de que los porcentajes de mayor valor no serán de aplicación a la extensión superficial que a las terrazas

corresponda, ya que con respecto a éstas no juzga la existencia del referido superior valor. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se practican las operaciones siguientes: (A) Finca Ibarra-cruz. Primero. Pisos altos (primero al séptimo inclusive y buhardilla), 1.044,71 metros cuadrados. Segundo. Terraza, 71,75 metros cuadrados. Tercero. Planta baja (210 metros cuadrados) y subplanta (163,80 metros cuadrados) = $373,80 \times 4 = 1.495,20$ metros cuadrados. Cuarto. Terrazas de estas plantas (41,10 + 28,85 metros cuadrados), 70,95 metros cuadrados. B) Finca de Bidebarrieta. Primero. Pisos primero y segundo (830 metros cuadrados por 1,43), 1.186,90 metros cuadrados. Segundo. Pisos tercero al sexto inclusive, 2.222,80 metros cuadrados. Tercero. Planta baja y solano (414,33 + 57,10), 541,46 metros cuadrados. Superficie total, 6.632,87 metros cuadrados. Caudal relicto: Tercera parte de la superficie total, 2.210,95 metros cuadrados. A deducir: Tercera parte de las superficies del terreno (273,65 metros cuadrados) y tres pisos (317,52 metros cuadrados) del edificio de Ibarra-cruz, privativa del causante, 197,05 metros cuadrados. Remanente ganancial, 2.013,90 metros cuadrados. Herencia: Primero. Mitad de gananciales, 1.006,95 metros cuadrados. Segundo. Parte privativa, 197,05 metros cuadrados. Remanente hereditario, 1.204 metros cuadrados. Usufructo legal: 50 por 100 de la tercera parte del remanente hereditario, 200,66 metros cuadrados. Corresponde percibir a doña Martina Murua: Primero. Por su mitad de gananciales, 1.006,95 metros cuadrados. Segundo. Por su usufructo capitalizado, 200,66 metros cuadrados. Superficie total, 1.207,71 metros cuadrados; que en pago de dicha superficie se adjudican a doña Martina Murua: Primero. El piso quinto de la calle Ibarra-cruz, 142,60 metros cuadrados. Segundo. La superficie entre columnas, a la derecha, entrando, de la planta baja del edificio de la calle de Bidebarrieta, destinada a garaje, 161,85 metros cuadrados. Tercero. El piso tercero de la calle Bidebarrieta, 567,60 metros cuadrados. Superficie total adjudicada, 872,05 metros cuadrados; que como consecuencia de cuanto antecede, y, en resumen, se adjudica: A doña Martina Murua Murua, por sus derechos e intereses en la sociedad conyugal y herencia causada por don Juan José Sarasqueta: Primero. Por cuanto por dichos conceptos le corresponde en la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», 4.100.963,32 pesetas cantidad que le será abonada en metálico por la herencia dentro del término de seis meses, a partir de la fecha del presente laudo. Segundo. Por los indicados conceptos referidos a las fincas de las calles de Ibarra-cruz y Bidebarrieta, de Eibar: a) El piso quinto de la calle de Ibarra-cruz, que actualmente ocupa. b) La superficie entre columnas, a la derecha, entrando, de la planta baja del edificio de la calle de Bidebarrieta, destinada a garaje. c) El piso tercero del edificio de la calle Bidebarrieta. A doña Juana Josefa Aguirregomez-corta Gabilondo, por sus derechos a la herencia de don Juan José Sarasqueta Aguirregomez-corta: Primero. La participación social de un tercio en la Sociedad «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, Sociedad Regular Colectiva». Segundo. Las fincas sitas en las calles de Ibarra-cruz y Bidebarrieta, de Eibar, salvo las partes de las mismas adjudicadas a doña Martina Murua y Murua:

RESULTANDO que el Procurador don Manuel García Gómez, en nombre y representación de doña Martina Murua Murua, y con depósito de 3.000 pesetas, interpuso recurso de nulidad contra el laudo anterior, al amparo del número tercero, inciso segundo, del artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el siguiente motivo:

Único.—Amparado en el número terce-

ro, inciso segundo, del artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando que en el laudo contra el que se recurre, el árbitro ha incurrido en exceso, resolviendo puntos no sometidos a su decisión; que la intracción denunciada se comete en el punto concreto del reparto de inmuebles, y sólo a ella se refiere el recurso por lo que, en lo demás, se acepta expresamente el laudo, dictado en el seno de la amistad y con la mejor buena fe por el árbitro de equidad, siquiera haya incurrido en errores que ocasionan un grave perjuicio a la recurrente; y así acontece, en concreto, con el extremo relativo a la valoración del negocio, en el que se llega a cifras inferiores, en mucho, no sólo a las que la recurrente pretendía, sino incluso a las que aceptó la parte contraria; y grandes son también las diferencias—en contra de la recurrente—derivadas de la aplicación a la herencia de su esposo de las antiguas normas del Código Civil sin recoger las mejoras introducidas en favor del conyuge viudo por la Ley de 24 de abril de 1958; pero como en todo ello el árbitro de equidad gozaba de libertad absoluta para resolver según su leal saber y entender, nada se ha de oponer frente a su decisión; que sin embargo, en el extremo que concretamente se denuncia, el exceso aparece claro, en la escritura de compromiso y en los apartados b) y c) de la estipulación quinta, después de señalar los contratantes el objeto del arbitraje, que consistía en determinar la participación de una y otra se facultaba al árbitro de equidad para que aquellos bienes inmuebles que estimase afectos al negocio, fueran adjudicados a doña Juana Josefa Aguirregomez-corta, pero estableciendo, como es lógico, la compensación, en metálico o en otros bienes inmuebles, que a doña Martina Murua había de abonarse; y otro tanto se decía respecto de los restantes bienes, en que se le facultaba para adjudicarlos en forma desigual, también compensando en metálico las posibles diferencias; pues bien, en el laudo, y al señalar la parte que a doña Martina Murua corresponde, el árbitro señor Caballero, después de los cálculos que estimó oportunos, fijó su participación en la siguiente forma: «Primero. Por su mitad de gananciales, 1.006,95 metros cuadrados. Segundo. Por su usufructo capitalizado, 200,66 metros cuadrados. Total, 1.207,71 metros cuadrados, y sin embargo, al adjudicar bienes concretos en pago de su haber, se limita a: Primero. El piso quinto de la calle Ibarra-cruz, 142,60 metros cuadrados. Segundo. La superficie entre columnas, a la derecha, entrando, de la planta baja del edificio de la calle Bidebarrieta, destinada a garaje, 161,85 metros cuadrados. Tercero. El piso tercero de la calle Bidebarrieta, 567,60 metros cuadrados. Total, 872,05 metros cuadrados; que resulta evidente que hay una diferencia entre lo que se dice corresponde a la recurrente y lo que en efecto se le adjudica, de 335,66 metros cuadrados, y que, al no otorgar ninguna compensación económica por el importe de tan considerable superficie, se la ocasiona un gravísimo perjuicio derivado de la separación o apartamiento del expresado mandato de la escritura de compromiso, puesto que en ella, que es Ley entre las partes y obliga también al que ha de resolver, sólo se facultaba a don José María Caballero para hacer adjudicaciones exclusivas a base de la oportuna compensación económica; y como en el laudo recurrido no se otorga dicha compensación, sea por olvido, error u otra causa cualquiera, tampoco debió efectuarse la adjudicación en la forma en que se hace, porque para ello no estaba autorizado el árbitro, que, de esta forma, comete el exceso en su labor:

RESULTANDO que, con depósito de 3.000 pesetas, el Procurador don Bienvenido Moreno Rodríguez, en nombre y re-

presentación de doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Gabilondo, don Lorenzo y don Miguel Sarasqueta Aguirregomezcorta, los tres por sí y además como socios gestores de la Sociedad Mercantil Regular Colectiva «Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta», interpuso recurso de nulidad al amparo del caso tercero del artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por los siguientes motivos:

Primero. Al amparo del artículo 1.791, caso tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber dictado el laudo don José María Caballero, árbitro designado en la fecha 18 de abril de 1959, cuando debió dictarlo, lo más tardar, en la fecha 19 de abril de 1958, en cuya fecha quedó extinguido el plazo para dictarlo; alegando que en la escritura de compromiso de fecha 18 de febrero de 1953, se concede, en el apartado VI de la misma, el plazo de dos meses para dictarlo, en la siguiente forma: «El laudo habrá de ser dictado en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de la firma de esta escritura de compromiso, si bien se reconoce al árbitro el derecho a prorrogarlo por dos meses más, si observare no pudiere dar término dentro del plazo a la tarea encomendada, correspondiendo a su libre arbitrio el determinar si se da o no la mencionada circunstancia»; es decir, que el árbitro pudo haber hecho uso de este derecho para dictar el laudo por dos meses más de prórroga, y debió notificar a los interesados si, en efecto, observaba que dentro de los dos primeros meses no podía dar término a la tarea encomendada, pero el árbitro nada hizo en este sentido, pues nada notificó a los interesados sobre esta precisa cuestión, y el no observar esta falta de tiempo antes de caducar este plazo, fatalmente quedó extinguido el plazo determinado en la escritura de compromiso el día 19 de abril de 1958, pues así resulta de computar el plazo de dos meses, conforme al artículo séptimo del Código Civil de treinta días cada uno, que empezaron a contarse al día siguiente de la fecha de la escritura, o sea el 19 de febrero, puesto que la escritura se firmó el día anterior, 18 (artículo 1.130 del Código Civil), y así resulta que el plazo de los dos meses se descompone así: diez días del mes de febrero, treinta y un días del mes de marzo y diecinueve días del mes de abril, todos del año 1958, que suman los sesenta de la computación legal de los dos meses; que fatalmente, pues, el plazo quedó extinguido en el preciso día 19 de abril de 1958, y como el laudo se dictó en 18 de abril de 1959, resulta que el árbitro cumplió su encargo fuera de plazo con un retraso de un año; que nada se opone a esta alegación la circunstancia de que en 17 de junio de 1958, los compromitentes concedían una prórroga de cuatro meses más al árbitro, pues en tal fecha 17 de junio había caducado ya el plazo, mucho más si nos atenemos a la fecha 19 de junio, y los plazos no pueden prorrogarse si están ya extinguidos, pues la prórroga de un plazo supone que el mismo esté vigente, y viva y transcurra, para que pueda establecerse sucesión ininterrumpida en el mismo, sin saltos y sin intermitencias, formando cadena en la sucesión del tiempo; que en 19 de abril de 1958, el plazo había muerto y por tanto en 19 de junio de 1958 y mejor aún el 17 de junio, ya no podía ser prorrogado; que en la escritura citada de prórroga de fecha 17 de junio de 1958, nada dicen los compromitentes de que el árbitro señor Caballero hubiera hecho uso del derecho a prorrogar el plazo, ni que este derecho así utilizado, les hubiera sido notificado fehacientemente, como tampoco el citado señor árbitro, en su laudo, ni en ningún otro documento o momento, hace mención a que hubiere hecho uso del derecho que se le concedió a prorrogar el plazo por dos meses; lo único que dice en su laudo, de un modo ambiguo e impreciso es que el plazo fijado para dictar

el laudo ha sido objeto de diferentes prórrogas, pero no precisa, si consumió o no la prórroga que se preordenó en la escritura original de compromiso de 18 de febrero de 1958; que si tenemos en cuenta que la Ley de Arbitraje, de 22 de diciembre de 1953, es una Ley institucional, que sustituyó a cuantas normas en materia de arbitraje y de amigables componedores estuvieran vigentes en España (artículo primero de la misma y disposición derogatoria); que en el artículo tercero se precisa que el arbitraje para ser eficaz necesitara ajustarse a las prescripciones de la misma Ley; que el artículo 17, número cuarto, exige que en la escritura de constitución del compromiso deberá constar el plazo o término en que el árbitro o árbitros hayan de pronunciar laudos, y que el artículo 26 imperativamente establece que el procedimiento arbitral se ajustará a lo que se establece en los artículos siguientes, es decir en los artículos 28, 29, 30 y 31, y en ningún caso podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, tenemos que concluir que esta Ley de Arbitraje regula normas de Derecho especial y singular, que no consiste en estipulaciones contrarias a sus dictados, ni que en modo alguno puedan modificarse o ampliarse en convenios posteriores a la escritura original, creadora del compromiso arbitral; que los compromitentes, conforme al artículo 17, número cuarto, de la Ley de Arbitraje, deben establecer el plazo o término para dictar el laudo y podrán establecer en este momento creador del compromiso las prórrogas y formas de estas prórrogas, pero no después; que precisamente los artículos 800, 801, 802 y 803 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fueron derogados, consentían establecer estas prórrogas después de la fecha de la escritura de compromiso, pero como la Ley de 22 de diciembre—que la sustituyó—de 1953, no las autoriza y las prohíbe (artículos 3 y 26) ordenando imperativamente, que el arbitraje para ser eficaz necesitara ajustarse a las prescripciones de esta Ley, y como en la Ley no están autorizadas las prórrogas del plazo (si estas no están preordenadas, hay que acabar con la necesidad de aceptar, de que el contenido normativo de esta Ley de arbitraje no puede ser ampliado, a cuestiones o formas que no se hayan precisado en la escritura de compromiso; que en resumen, todas las escrituras de prórroga carecen de eficacia para resucitar un plazo que ya murió, o quedó extinguido, porque el plazo para dictar el laudo quedó consumido sin que éste se dictara y la prórroga de dos meses preordenada quedó sin efecto, al no hacer uso de la misma el árbitro, que sin duda no observó antes ni consideró necesaria utilizar en la forma precisa en que fue preordenada.

Segundo.—Al amparo del artículo 1.691, caso tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber dictado el laudo fuera de plazo en la fecha 18 de abril de 1959, pues aunque pudiera considerarse que el árbitro utilizó el derecho a prorrogar por dos meses el plazo para dictar el laudo, se extinguió en este supuesto el día 19 de junio de 1958, pues la escritura de prórroga de 17 de junio del mismo año, así como las otras tres que sucesivamente también se otorgaron para prorrogar plazo, son nulas y carecen de eficacia para estimar como legal la prórroga de cuatro meses en la primera (documento número 6), tres meses en la segunda (documento número 8), dos meses en la tercera (documento número 10) y un mes en la última (documento número 12); alegando que en efecto, si no se diera lugar al recurso de nulidad por el primer motivo que se ha desarrollado, procedería a virtud de este segundo que se formula, también al amparo del caso tercero del artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues el plazo quedó extinguido en este supuesto el día 19 de junio de 1958; que la escritura de prórroga de fecha 17 de junio de 1958, que prorrogó por cuatro

meses (documento número 6) la de fecha 16 de octubre de 1958 (documento número 8), que prorrogó por tres meses la de 14 de enero de 1959, que prorrogó por dos meses (documento número 10) y la de 16 de marzo de 1959, que prorrogó por un mes (documento número 12), son documentos nulos y sin eficacia alguna por cuanto se estipularon en contra de lo dispuesto en los artículos 17, caso cuarto, 26 y 27 en su inseparable conexión con los artículos primero y tercero de la Ley de Arbitraje de 22 de diciembre de 1953, ya que el arbitraje para que resulte eficaz, tiene que ajustarse a las prescripciones de esta Ley, y no se ajusta a la misma el otorgamiento de unas escrituras de prórroga de plazo que la misma Ley contemplada no autoriza y que prohíbe alterar el procedimiento (artículos 26, 27 y 29 y 30), pues en este último se dice que habrá de dictarse dentro del plazo estipulado en la escritura de compromiso, pues el plazo para dictar un laudo es forma esencial del procedimiento que no puede alterarse bajo pena de nulidad (artículo 30 de la Ley que se relaciona con el caso tercero del artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) Que en este aspecto difiere la Ley vigente de la Ley constituida, pues mientras en esta segunda, en sus artículos 800, 801, 802 y 803, de la Ley de Enjuiciamiento Civil derogada, se autorizaban, en cambio, en la vigente, no son establecidas tales prórrogas, pues ya en el artículo 17, número cuarto, se establece el plazo o término, y es en este momento de creación del compromiso cuando deben fijarse, es decir, tienen que ser preordenadas, no establecidas con posterioridad a la escritura de compromiso; que la Ley de 1953 ha omitido todo lo relativo a la prórroga del plazo para dictar el laudo arbitral, y algunos autores creen que así se ha creado una laguna que antes, en la Ley derogada, no la habría; que el criterio de la parte recurrente a este aspecto tiene que discrepar, pues tratándose de una Ley especial, institucional, que regula un derecho singular, no cabe hacer distinción donde no lo hay, y en una Ley especial no cabe aplicar su campo normativo a circunstancias y hechos que no son determinados, ni cabe una aplicación por analogía, pues el principio general de derecho, que donde la Ley no distingue no cabe distinguir, encaja perfectamente en Leyes de esta naturaleza; si el legislador hubiere tenido intención de conservar en la Ley nueva la autorización para prorrogar planes establecidos, lo hubiera hecho, y por tanto, hay que concluir en que la Ley vigente no las autoriza, pues las Leyes especiales carecen de expansión, tanto en la materia como en el tiempo, y en el espacio, pues su característica es de interpretación restrictiva; que las prórrogas no están autorizadas en la Ley de 22 de diciembre de 1953, que regula el arbitraje, y siendo así, el plazo para dictar el laudo decayó en 18 de junio de 1958, y como quiera que el laudo se dictó en 18 de abril del año 1959, procede admitir el recurso por este segundo motivo y declarar nulo el laudo.

Tercero. También autorizado en el caso tercero del artículo 1.971 (sic) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto se dictó el laudo fuera de plazo, ya que en ambos supuestos de que no fueran admitidos los motivos primero y segundo, sería forzoso admitir este tercero, ya que aunque fuera cierto, que no lo es, que el árbitro hiciera uso de la prórroga que se le concedió en la escritura de compromiso, y que en su caso fueran válidas y eficaces, que no lo son, las otras cuatro prórrogas convenidas por los compromitentes en las escrituras reseñadas, el laudo fue dictado fuera de plazo, pues los catorce meses del supuesto plazo para dictar el laudo es este caso, dos meses que se concedieron en la escritura de compromiso; dos meses más de prórroga que le fué concedido en la misma escritu-

ra al árbitro y los diez meses más a que ascienden las cuatro prórrogas convenidas con posterioridad, terminaron el día 14 de abril de 1959, y por tanto el laudo se dictó fuera de plazo al dictarse en 18 de abril de 1959; que en efecto, el artículo séptimo del Código Civil establece que cuando un plazo sea señalado por meses se entenderá que éstos son de treinta días, y como son catorce los meses que suman el plazo y todas las prórrogas, resulta que la fecha término en que el laudo debió ser dictado es el último de los cuatrocientos veinte días que el plazo y prórrogas comprende, a contar desde el día 19 de febrero de 1958, siguiente al día en que se formalizó la de compromiso de 18 de febrero de 1958, día éste que no ha de contar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.130 del Código Civil; que los días que transcurrieron, siendo el primero que se cuenta y computa, el 19 de febrero de 1958, hasta el día 18 inclusive de abril de 1959, fecha del laudo, son cuatrocientos veinticuatro días y por tanto el laudo se dictó fuera de tiempo, que la contabilidad matemática del plazo se descompone así: diez días del mes de febrero, treinta y un días del mes de marzo, treinta días del mes de abril, treinta y un días del mes de mayo, treinta del mes de junio, treinta y uno del mes de julio, treinta y uno del mes de agosto, treinta del mes de septiembre, treinta y uno del mes de octubre, treinta del mes de noviembre y treinta y uno del mes de diciembre, todos del año 1958; treinta y un días del mes de enero de 1959, veintiocho del mes de febrero, treinta y uno del mes de marzo y dieciocho días del mes de abril, todos ellos del año 1959, suman en total cuatrocientos veinticuatro días, y como el plazo, junto con todas las prórrogas, conforme a los artículos séptimo y 1.130 del Código Civil son cuatrocientos veinte días, no hay duda alguna que el laudo fue dictado fuera de plazo, que en la escritura de compromiso, los meses no se determinaron expresamente por sus nombres, único caso en que pueden computar por los días que respectivamente tengan, y como el Tribunal Supremo en sentencias de 24 de octubre de 1909, 10 de marzo de 1942, 23 de enero de 1946 y 21 de mayo de 1951, tiene declarada la doctrina que este artículo séptimo del Código Civil será aplicado a toda clase de Leyes, y que cuando se trata de computar plazos señalados por meses éstos se computarán como de treinta días naturales, siempre que no se expresen por sus respectivos nombres, sean cuales sean los meses completos que se hallen comprendidos dentro del plazo, según de manera inequívoca se declaró en la sentencia de esta misma Sala del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1951, queda aclarado de que el laudo dictado por el árbitro don José María Caballero en 18 de abril de 1959 fue dictado fuera de plazo, siendo de aplicar el caso tercero del artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y declarar nulo el mismo de acuerdo con el artículo 1.779 de la misma Ley Procesal, mandando devolver el depósito constituido.

Cuarto. Con carácter alternativo se formula este motivo, al amparo también del artículo 1.691, caso tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber resuelto en el laudo que se recurre puntos no sometidos a la decisión del árbitro, alegando que el árbitro señor Caballero resolvió cinco puntos para los que no estaba autorizado en la escritura de compromiso y que son: a) El que se refiere a haber decidido que el causante era acreedor de la «Sociedad Regular Colectiva Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta», por la suma de 507.764 pesetas y 16 céntimos, en 31 de diciembre de 1955. b) El haber decidido dar a los bienes de la citada «Sociedad Regular Colectiva Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta», por la suma de 507.764 pesetas y 16 céntimos en 31 de diciembre de 1955. b) El haber decidi-

do dar a los bienes de la citada Sociedad Regular Colectiva un valor espiritual o inmaterial de 4.516.740 pesetas y 30 céntimos, incrementando así en forma extraordinaria la suma de bienes tangibles, que fue para la única que se le concedió autorización determinando los bienes relictos del causante don Juan Sarasqueta. c) El haber decidido que le sean entregadas a la viuda doña Martina Murua Murua la cantidad de 1.016.767 pesetas con 61 céntimos, como importe de un 15 por 100 de intereses durante dos años y medio a partir del fallecimiento de su esposo, don Juan José Sarasqueta en concepto de indemnización. d) El haber decidido que a la viuda doña Martina Murua Murua se le conceda un premio de afección del 10 por 100, equivalente a la cantidad de 410.096 pesetas con 33 céntimos. e) Haber adjudicado a doña Martina Murua el inmueble que comprende la superficie del local sito entre columnas, a la derecha, entrando, de la planta baja del edificio de la calle de Bidebarrieta, destinada a garaje y por tanto que forma parte esencial de la industria; que es notoria la jurisprudencia inalterable de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de que las facultades de los árbitros, limitadas por la voluntad de las partes, y que son consignadas en la escritura de compromiso, no deben entenderse ampliadas, ya que de hacerlo vendrían aquéllas a resolver sobre casos y cosas que no les fueron sometidos, y así se puede señalar como reiteración de esta doctrina jurisprudencial la sentencia de 21 de marzo de 1957, y que ha reafirmado que las cláusulas de un compromiso han de interpretarse restrictivamente; que esto sentado, si se analiza la escritura de compromiso de 18 de febrero de 1958, pronto se observa que la autorización que se concede al árbitro señor Caballero es para decidir (véase el apartado segundo) sobre la liquidación, división y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento de don Juan José Sarasqueta, con previa liquidación de la sociedad de gananciales constituida por el fallecido y doña Martina Murua; que estas operaciones eran las propias para formar los inventarios y balance de bienes de la «Sociedad Miguel, Lorenzo y Juan Sarasqueta, S. R. C.», a las fechas en que contrajeron matrimonio, el socio de la misma fallecido, don Juan Sarasqueta y la comprometida doña Martina Murua, y a la fecha del fallecimiento del primero, acaecida en 14 de octubre de 1956, determinando los bienes que fueron privativos y los que tuvieron carácter ganancial para después reducir a metálico los derechos que en los bienes gananciales correspondieran a la viuda señora Murua, y valorar también a metálico la cuota viudal usufructuaria; pero entre estas facultades no estaban comprendidas ni pueden ser consideradas por un fenómeno ampliatorio el reconocimiento de créditos de signo deudor, en perjuicio de la Sociedad Regular Colectiva citada, aunque estos créditos provinieran del socio fallecido que recíprocamente así se consideraba deudor de sí mismo si estos créditos no tenían el carácter de ejecutables y no se hicieron figurar en el inventario-balance de bienes a la fecha 14 de febrero de 1956, para cuya formalización se le dio facultades, pero no para decidir sobre reconocimiento de créditos personales que no tuvieron acceso al inventario-balance; que tampoco estaba autorizado el señor Caballero para fijar premios por afección por la conducta laboral o rectora de doña Martina Murua, ni tampoco para fijar indemnizaciones por intereses del capital relicto durante dos años y medio después del fallecimiento, pues los derechos y las obligaciones en relación con los bienes gananciales se extinguen en la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales por fallecimiento, y solamente los beneficios que hasta esta fecha se hayan producido o creado pueden ser objeto de partición o

adjudicación; y sobre incrementar el valor material de los bienes creados durante el tiempo que rigió la sociedad de gananciales, con otros de carácter inmaterial o espiritual, no deja de ser todo esto un sofisma científico, sin base en la realidad, pues para discernir sobre este incremento de valor espiritual o inmaterial, los comprometidos no hicieron indicación alguna, ni al respecto dieron facultades para ser resuelta cuestión tan espinosa y tan difícil y por ello no estuvo en las facultades del árbitro designado resolver ni calcular sobre este valor; que también el señor árbitro en el laudo dictado ante Notario el día 18 de abril de 1959, traspasó de modo violento las autorizaciones y facultades que se le concedieron sobre reducción a metálico de los derechos en los bienes inmuebles, y contra la limitación que en este aspecto se le impuso en la escritura de compromiso que todos los bienes inmuebles que pudieran afectar a la industria de los comprometidos deberían adjudicarse a la heredera doña Juana Josefa Aguirregomezcorta, buscando otras decisiones en compensación a favor de la viuda doña Martina Murua, pues bien, en lugar de cumplir en sus decisiones el árbitro, con esta limitación, hace adjudicación a esta última del local inmueble destinado a garaje de la fábrica, situado a la derecha, entrando, de la planta baja del edificio de la calle de Bidebarrieta; que acreditándose así de un modo rotundo que el señor Caballero, en su laudo de arbitraje, ha resuelto sobre los cinco puntos relacionados en este motivo y que se señalan en los apartados a), b), c), d), e), saltando a la vista esta falta de adecuación entre lo estipulado en la escritura de compromiso y lo que resulta contenido en el laudo decisorio, se ha de concluir con que debe declararse haber lugar con carácter alternativo para el caso de que no sean aceptados los tres primeros motivos, este cuarto y resolver declarar nulo el citado laudo de arbitraje conforme al artículo 1.780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decretando como nulas las cinco decisiones relacionadas en este motivo:

RESULTANDO que oído el Magistrado Ponente, se tuvieron por interpuestos los recursos relacionados, ordenándose por la Sala la formación de apuntamiento:

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Vicente Gallarte González:

CONSIDERANDO que constituyen antecedentes indispensables para la decisión en los dos recursos entablados contra el laudo que en arbitraje de equidad pronunció don José María Caballero y Aldama: a) Que en 14 de octubre de 1956 falleció «ab intestato» don Juan Segundo Sarasqueta Aguirregomezcorta, del que por el Juzgado fué declarada heredera su madre, doña Juana Josefa Aguirregomezcorta Cabilondo, sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria de la viuda, doña Martina Murua Murua. b) Que al iniciarse la partición de los bienes, tanto al intentar concretar éstos como en relación a la liquidación previa de la sociedad de gananciales, surgieron incidencias entre los interesados, diferencias que de mutuo acuerdo decidieron someter al arbitraje del Letrado don José María Caballero, en arbitraje de equidad. c) A tal fin otorgaron la escritura pública de 18 de febrero de 1958, en la que se fijó el plazo de dos meses para dictar el laudo, facultando al árbitro para prorrogarlo por dos meses más. d) Que los interesados periódicamente fueron otorgando sucesivas escrituras no sólo de prórroga del plazo, sino de confirmación y renovación del compromiso, la última de 16 de marzo de 1959, que aparte la confirmación y renovación del compromiso que subsiste en toda su integridad en los términos en la misma escritura estipulados, fijaba un último plazo de un mes, a contar del día 19 de marzo de 1959. e) Que ratificando sus propósitos compromisorios, todos los interesados intervinieron intensa y exten-

samente en la labor arbitral, mediante escritos, alegaciones, documentos e informes en defensa de las pretensiones mantenidas. I) Y finalmente, que al árbitro de equidad se le facultó de un modo genérico para operar la liquidación, división y adjudicación de los bienes relicto al fallecimiento de don Juan Segundo Sarasqueta, con previa liquidación de la sociedad legal de gananciales, constituida por el fallecido y doña Martina Murúa, y en concreto, entre otras muchas facultades: I) para la formación del balance-inventario de la Sociedad Regular Colectiva que utiliza el nombre comercial de «Viuda e Hijos de J. J. Sarasqueta», en la fecha del matrimonio del causante con doña Martina y en la fecha de su disolución por obito de don Juan Segundo, así como la existencia de otros bienes; II) factores y fijación de gananciales—con libre criterio del árbitro para la determinación de todos los factores de valoración no contables—; III) examen de cuentas corrientes y documentos, con la máxima libertad, oyendo a los interesados y a las personas que puedan auxiliarle; IV) operar las adjudicaciones, atribuyendo a la madre, doña Juana Josefa, los inmuebles afectos al uso de la industria, que el árbitro determinará dentro de su leal saber y entender...

CONSIDERANDO que contra el laudo dictado, los interesados prepararon y formalizaron sendos recursos: doña Juana Josefa Aguirregomezorta, recurso extraordinario de nulidad, al amparo del artículo 1.691 de la Ley riuaria civil, número tercero; haberse dictado el laudo fuera de plazo y haber resucito puntos no sometidos a la decisión del árbitro; y doña Martina Murúa Murúa, recurso de nulidad contra el laudo por resolver puntos no sometidos a su decisión:

CONSIDERANDO que el primer tema en punto a la oportunidad de la fecha en que el laudo se dictó, 18 de abril de 1959, se desenvuelve en tres distintos motivos, invocando la improrrogabilidad del plazo, por nulidad de las prórrogas convenidas, que la vigente Ley de Arbitrajes no autoriza; que en todo caso, y aun presentes las prórrogas, el laudo apareció fuera de plazo, y, por último, que sumadas todas las prórrogas, estas no legitimaban la actividad del árbitro más allá del 14 de abril de 1959 y el laudo se dictó el 18 del mismo mes:

CONSIDERANDO que firme e inmovible la vocación compromisoria de todos los interesados, cual se desprende de la conducta reiterada confirmando y renovando el compromiso y manteniéndole intangible en los precisos términos de la escritura inicial, que mantiene hasta la suscrita el 18 de marzo de 1959, señalando su vigencia hasta un mes después, a contar del 19 de marzo, vocación compromisoria que se mantiene por todos los compromitentes, incluso en los trabajos y tareas del árbitro, a los que concurren sin protesta ni reserva, no parece que una vez dictado a ciencia y paciencia de todos, pueda justificarse su impugnación al abrigo del carácter institucional que se advierte en el arbitraje, bastante atenuado precisamente en el de equidad, por lo que sin entrar de lleno en el problema que plantea la supresión del artículo 802 de la Ley derogada, en el caso del día basta detenerse en la lectura de todas las escrituras que el recurrente denomina de prórroga, pero que bien fácilmente se alcanza, representan una periódica renovación y declaración de vigencia de los términos del compromiso sin tenerse que utilizar el mecanismo de la prórroga, compromiso tan extenso—liquidación, adjudicación de bienes y liquidación de sociedad conyugal—que ha merecido de la doctrina y de la jurisprudencia, véase entre muchas la sentencia de 30 de diciembre de 1944, la calificación de convención obligatoria al amparo del artículo 1.255 del Código Civil, y consiguientemente autónomo y al margen del propio compromi-

so, todo concluye en que siendo los interesados, mayores de edad, los únicos dueños del mantenimiento de su compromiso, contrato útil que puede evitar discordias y restablecer la paz en las familias, por lo que bien fácil se advierte que no es misión de los Tribunales complicar o crear dificultades al móvil de paz y equidad que preside el juicio arbitral, desnaturalizándole en sus características esenciales, son razones todas por las que procede desestimar los tres primeros motivos del recurso interpuesto por la señora madre del causante:

CONSIDERANDO que para rechazar los otros dos motivos de su recurso en punto a la extralimitación del árbitro, basta un simple cotejo de los temas sometidos al árbitro de equidad (apartado f) del considerando primero) con los excesos que se denuncian: participación en la Sociedad Regular Colectiva de que el causante era socio, compensaciones a la viuda y la madre, intereses y beneficios, reducción a metálico, etc., etc., son temas todos incluidos de modo expreso en la escritura de compromiso:

CONSIDERANDO que por lo que afecta al recurso de nulidad impulsado por la viuda doña Martina Murúa, denunciando también excesos y extralimitaciones del árbitro, basta repasar su contenido para advertir que más que combatir las facultades concedidas al árbitro y su posible extralimitación, lo que no consiste en la amplitud y detalle de las conferidas, lo que hace el recurso es impugnar las decisiones de fondo; lo que no resulta factible a la vista de los artículos 29 y 30 de la vigente Ley de Arbitraje, ni siquiera invocando olvidos y omisiones, que el árbitro en su elevada función compensó en otras paridas. En su virtud, debe rechazarse el único motivo:

CONSIDERANDO que el abono de las costas debe hacerse por cada una de las partes las causadas a su instancia y la mitad de la de carácter común.

FALLAMOS que debemos declarar y decretamos no haber lugar a ninguno de los dos recursos de nulidad interpuestos, uno, a nombre de doña Martina Murúa Murúa y otro, la de doña Juana Josefa Aguirregomezorta Gabllondo, don Lorenzo y don Miguel Sarasqueta Aguirregomezorta, contra el laudo de equidad dictado por el árbitro don José María Caballero Aldama con fecha 18 de abril de 1959, ante el Notario don Julián María Ansuetequi Alday, sustituto y para el protocolo del Notario de Elbar don Juan Ignacio Gomaza y Ozamiz; condenamos a cada una de las partes recurrentes al pago de las costas causadas a su instancia y al de la mitad de las comunes, y a la pérdida del depósito que tienen constituido, que recibirá la aplicación señalada en la Ley.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», pasándose al efecto las necesarias copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Francisco Eyre Varela.—Obdulio Siboni Cuenca.—Antonio de V.-Tutor.—Vicente Guillarte.—Manuel Taboada Roca (rubricados).

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Vicente Guillarte González, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Ponente en estos autos, celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de que certifico.—Ranmó Morales (rubricado).

SALA QUINTA

Secretaría

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don

de la Junta Nacional de la Hermandad de los Retirados de los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución tacia del Ministerio de Hacienda sobre descuento a los militares retirados del 8 por 100 de la indemnización familiar que fue solicitada en 12 de octubre de 1960 y denegada tácitamente por la Dirección General de Impuestos sobre la Renta: plico al que han correspondido el número general 6.311 y el 149 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 1 de diciembre de 1961.

Madrid, 5 de diciembre de 1961.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.811.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Vicente Sazura Pérez se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución del Ministerio de la Gobernación de 10 de febrero de 1961, que confirmó la de 7 de diciembre de 1960 que estimó en parte recurso de alzada contra acuerdo del Gobierno Civil de Valencia relativo a la denominación, categoría y sueldo del recurrente, Auxiliar del Ayuntamiento de Almusafes; plico al que han correspondido el número general 5.853 y el 78 de 1961 de la Secretaría de que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 1 de diciembre de 1961.

Madrid, 5 de diciembre de 1961.—El Secretario, Isidro Almonacid.—5.812.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado, y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Feliciano Martín Villería se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución del Ministerio del Ejército de 20 de mayo de 1961, relativa a variación del señalamiento de haber pasivo que le ha sido hecho como Teniente de la Policía Armada en situación de retirado; plico al que han correspondido el número general 7.295 y el 306 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 28 de noviembre de 1961.

Madrid, 6 de diciembre de 1961.—El Secretario, Ramón Pajaron.—5.813.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo que por don Antonio Mateo Cubells se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución del Ministerio de la Vivienda de 10 de julio de 1961 sobre expropiación forzosa de la finca número 9 (rústica) del polígono «Alamedas», de Málaga (expediente 2.671 de 1960), pleito al que han correspondido el número general 7.259 y el 299 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 30 de noviembre de 1961.

Madrid, 5 de diciembre de 1961.—El Secretario, Ramón Pajarón.—5.790.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por «Inmobiliaria Juban, S. A.», se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución del Ministerio de la Vivienda de 15 de marzo de 1961, que revocó resolución del Gobierno Civil de Madrid de 23 de abril de 1958, recurrida en alzada por «Inmobiliaria Juban, S. A.», y que fijó el justiprecio de una parcela expropiada a don Antonio de Navas Antonio y otros (expediente 3.270-154-C-1949); pleito al que han correspondido el número 6.036 y el 115 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 2 de diciembre de 1961.

Madrid, 5 de diciembre de 1961.—El Secretario, José Benítez.—5.791.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Antonio, doña Antonia, don Silvio y don Domingo Navas Antonio se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución del Ministerio de la Vivienda de 15 de marzo de 1961, que resuelve el recurso interpuesto por los recurrentes contra la resolución del excelentísimo señor Gobernador civil de Madrid de 23 de abril de 1958, que fijó el justiprecio de la finca propiedad de los señores Navas (expediente 3.270-155-C-1949); pleito al que han correspondido el número general 6.043 y el 117 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo

66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 2 de diciembre de 1961.

Madrid, 4 de diciembre de 1961.—El Secretario, José Benítez.—5.792.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don Cándido de Francisco Galdeano se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre resolución de la Dirección General de Administración Local de 24 de enero de 1961, confirmada por la de 4 de mayo siguiente, que niegan al recurrente el derecho que estima asistirle de que le sea computado a efectos de derechos pasivos y de quinquenios el tiempo que permaneció destituido, como consecuencia de expediente de depuración; pleito al que han correspondido el número general 6.049 y el 119 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público en cumplimiento de providencia fecha 2 de diciembre de 1961.

Madrid, 4 de diciembre de 1961.—El Secretario, José Benítez.—5.793.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por Dris Ben el Hach Al-Lal Ben Tibb se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Orden del Ministerio del Ejército de 10 de junio de 1961 que dispuso el pase a la situación de retirado del recurrente y contra la Resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra tal Orden, pleito al que ha correspondido el número general 6.951 y el 254 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 4 de diciembre de 1961.

Madrid, 7 de diciembre de 1961.—El Secretario, José Benítez.—5.840.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por doña María de los Dolores Burzos Romero se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre acuerdo del Ministerio de Hacienda de 23 de mayo de 1961 que declaró a la recurrente cesante en el cargo de Administradora de Igterias de Medina del Campo, pleito al que

ha correspondido el número general 6.212 y el 137 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 6 de diciembre de 1961.

Madrid, 7 de diciembre de 1961.—El Secretario, José Benítez.—5.841.

Por el presente anuncio se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren interés directo en el mantenimiento del mismo, que por don José Rodríguez Cruz se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre Resoluciones del Ministerio de Marina de 23 de noviembre de 1960 y 2 de marzo de 1961 por las que, en la primera se negó al recurrente acogerse a los beneficios de opción previstos en el artículo 19 de la Ley de 25 de noviembre de 1940, y en la segunda se desestimó el recurso de reposición formulado contra la primera, pleito al que ha correspondido el número general 6.096 y el 123 de 1961 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación con los 29 y 30, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con la prevención de que si no comparecieren ante la susodicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos expresados en el artículo 66 de la misma, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, se hace público, en cumplimiento de providencia fecha 6 de diciembre de 1961.

Madrid, 7 de diciembre de 1961.—El Secretario, José Benítez.—5.842.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BADAJOZ

Don Pedro Márquez Buenestado, Magistrado, Juez de Primera Instancia número uno de esta capital, en funciones del Juzgado número dos, por sustitución reglamentaria.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos a instancia de «Harinera de Badajoz, S. A.», representada por el Procurador don Luis Carmona Urioste, contra don Luis Blanco Carvajal, mayor de edad, casado, industrial y de esta vecindad, con domicilio en calle Calvo Sotelo, número 65, en reclamación de 299.361 pesetas de principal, gastos de protesto, intereses y costas, se ha acordado sacar a tercera y pública subasta en quiebra, por término de veinte días, los siguientes bienes:

1.º Una casa sita en Badajoz, en calle Calvo Sotelo, 65, que linda: Derecha, entrando, con José e Isabel de los Ríos Rosado; izquierda, con María e Isabel Bueno Rodríguez; espalda, con Plácido y Antonio Silva. Consta de dos pisos o plantas, con diferentes habitaciones y dependencias, y mide 335 metros cuadrados y 40 decímetros; es parte integrante de esta finca una panadería, compuesta de cuatro hornos y dos cilindros, así como dos amasadoras. Inserta al folio 137 vuelto, tomo 163, finca 1.148, inscripción segunda. Dicha casa ha sido tasada en la cantidad de un millón doscientas noventa

mil ciento trece pesetas, y el complejo industrial en trescientas seis mil cuatrocientas pesetas.

2.º Otra casa en Badajoz, en la calle Afogados, número 47, que linda: Derecha, entrando, con Diego Cruz Pintor; izquierda, con herederos de Antonio Velasco Sardiña; espalda, con la que tiene su entrada por la calle Bravo Murillo, de Pedro Benitez. Consta de planta baja y alta, con diferentes habitaciones y dependencias. Mide 44 metros cuadrados. Inscrita al folio 54, tomo 37, línea 254, inscripción sexta, y ha sido tasada en la cantidad de ochenta y cinco mil ochocientos veintinueve pesetas con cincuenta céntimos.

Para su remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, se ha señalado el día 25 de enero de 1962, y hora de las doce de la mañana, haciéndose constar:

1.º Que para tomar parte en la licitación deberá consignarse en la Mesa del Juzgado, o establecimiento público destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento efectivo del tipo de segunda subasta, que se celebró con la rebaja del veinticinco por ciento del valor de los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.

2.º La subasta que se anuncia se celebrará sin sujeción a tipo y en calidad de coeder el remate a un tercero.

3.º Que los títulos de propiedad de las fincas han sido suplidos por certificación del Registro y estarán de manifiesto en Secretaría, debiendo los licitadores conformarse con la titulación, sin tener derecho a exigir otros.

4.º Que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Badajoz a 5 de diciembre de 1961.—El Juez Pedro Márquez.—El Secretario (ilegible).—9.100.

BARCELONA

En autos de juicio declarativo de menor cuantía que se siguen ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de esta capital, a demanda de doña Adela Duarte Gavin, representada por el Procurador don Angel Joaniquet Ibarz, contra don Joaquin Mateo Brumos, de actual paradero desconocido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Juez, señor De la Pedraja.—Barcelona, 4 de diciembre de 1961. Habida cuenta la anterior diligencia, y según se propone en la demanda, notifíquese y emplácese al demandado don Joaquin Mateo Brumos, mediante cédula que, además de fijarse en los estrados del Juzgado, se inserte en el «Boletín Oficial del Estado», librándose a tal efecto el oportuno despacho, señalándole el término de nueve días para comparecer en el juicio.—Lo mandó y firma S. S.ª Doy fe Pedraja.—Ante mí Antonio González.»

Y para su notificación al demandado don Joaquin Mateo Brumos, a quien se emplaza a los fines y por el término indicado, se expide la presente, a la que se dará la publicidad dispuesta en Barcelona a 5 de diciembre de 1961.—El Secretario, Antonio González.—9.078.

En méritos de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia número dieciocho de los de esta ciudad, en providencia de esta fecha, dictada en el expediente de extravío de valores promovido por don Antonio Pérez Pascual, mayor de edad, casado, militar, de esta vecindad, con domicilio en la Vía Layetana, número cuarenta y ocho, obrando como padre y legal representante de los menores de edad, doña

Pilar y don Antonio Pérez Luño y representado por el Procurador don José Ignacio Anzizu Borrell, sobre extravío de ochenta y ocho obligaciones Red Nacional Ferrocarriles Españoles cuatro por ciento, emisión abril mil novecientos cincuenta y uno, de la serie A, de valor nominal mil pesetas cada uno de ellos, señalados de números veinte mil tres al veinte mil noventa, ambos inclusive, cuales relacionadas obligaciones pertenecen: las señaladas de números veinte mil tres al veinte mil cuarenta y seis a don Antonio Pérez Luño, y las de números veinte mil cuarenta y siete al veinte mil noventa a doña Pilar Pérez Luño, por haberlas suscrito el día veintisiete de junio de mil novecientos cincuenta y uno, con intervención del que fue Agente de Cambio y Bolsa de esta plaza don Octavio Bruix Rodéilas; por el presente se hace pública la incoación de dicho expediente de extravío de valores y se confiere traslado de la demanda a las ignoradas personas en cuyo poder pudieran encontrarse tales títulos extraviados, para que dentro del término de nueve días comparezcan, personándose en forma y contesten la demanda; bajo apercibimiento de parales el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Dado en Barcelona a veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. El Secretario, E. Panero.—9.009.

BILBAO

Don Ricardo Santolaya Sánchez, Magistrado, Juez de Primera Instancia número 3 de esta villa y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expediente, promovido a nombre de don Juan Apaolaza Murguiondo, sobre declaración de falcimiento de sus hermanos don Manuel Antonio y doña María Josefita Apaolaza Murguiondo, naturales de Erandio y San Sebastián, donde nacieron, respectivamente, el 23 de junio de 1891 y 8 de septiembre de 1888, y cuya última residencia conocida fué en Bilbao, los que se ausentaron a la República Argentina, y siendo la última noticia que se tuvo de los mismos el 29 de junio de 1929, llamándose a los que se crean con derecho a ello para que puecan comparecer en dicho expediente haciendo oposición o alegando lo que estimen pertinente.

Dado en Bilbao a 10 de octubre de 1961. El Juez, Ricardo Santolaya.—El Secretario (ilegible).—9.077. 1.º 18-12-1961.

Don Luis Antonio Burón Barba, Magistrado, Juez de Primera Instancia número dos de los de esta villa.

Por el presente edicto se hace saber que en este Juzgado, y con el número doscientos cincuenta y siete de mil novecientos sesenta y uno, se sigue procedimiento de quiebra voluntaria de la herencia del finado don Manuel Azarola Pérez a instancia de su viuda, doña Josefina Sanzgróniz Menchaca, y su hija doña Rosa Azarola Sanzgróniz, representadas por el Procurador don Miguel de Vega, en cuyo procedimiento se ha dictado por este Juzgado con esta fecha auto que contiene la siguiente parte dispositiva:

«Se declara en estado de quiebra voluntaria a la herencia del finado don Manuel Azarola Pérez, retrotrayéndose por ahora, y sin perjuicio de tercero, los efectos de esta declaración al día nueve de junio del corriente año. Se nombra Comisario de la quiebra al comerciante de esta plaza don Enrique Rodríguez Polledo, a quien se comunicará este nombramiento por medio de oficio para que proceda a la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra, su inventario y depósito en la forma que dispone el artículo mil trescientos treinta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Ci-

vil, compareciendo también a aceptar y jurar el cargo. Se decreta así bien la ocupación judicial de todas las pertenencias de la herencia del finado y de los libros, papeles y documentos de su giro, nombrándose depositario al Letrado de esta villa don Enrique Suárez Barroso, a cuyo cargo se pondrá la conservación de todos los bienes ocupados hasta el nombramiento de Síndicos. Hágase publicación de la declaración de esta quiebra por medio de edictos, que se fijarán en el sitio público de costumbre de este Juzgado y se insertarán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», procediéndose a la retención de la correspondencia de la quebrada para los fines y en los términos que se expresan en el artículo mil cincuenta y ocho del Código de Comercio de mil ochocientos veintinueve, para lo que se librará el oportuno oficio al señor Administrador de Correos, debiendo presentar el Comisario el estado de acreedores en la forma y con el término fijado en el artículo mil trescientos cuarenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en su día y en su vista acordar lo procedente con respecto a la primera Junta general para el nombramiento de Síndicos. Se decreta igualmente la acumulación al presente juicio de todos los autos ejecutivos, incidencias y ejecuciones que contra la quebrada haya pendientes tanto en este mismo Juzgado y en los de esta capital como en cualquier otro partido que se determinen por la parte actora, librándose al efecto los despachos necesarios y formense con testimonios del encabezamiento y parte dispositiva de este auto las oportunas piezas separadas a cuyo fin se dará cuenta con aquellos testimonios.—Así lo acuerda y firma el señor don Luis Antonio Burón Barba, Magistrado, Juez de Primera Instancia número dos de los de esta villa, doy fe.—L. A. Burón Barba.—Ante mí, Carlos F. Miranda (rubricado).»

Y para general conocimiento y a los fines acordados se extiende el presente edicto.

Dado en Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. — El Juez, Luis Antonio Burón Barba.—El Secretario, P. S. (ilegible).—9.007.

BRIVIESCA

Conforme a lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia de Briviesca y su partido, en auto de esta fecha, dictado en acto de jurisdicción voluntaria en negocios de Comercio número 53 de 1961, de los del Juzgado, por la presente se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Mercantil «Julian González, S. A.», domiciliada en Briviesca, carretera Santander, para el próximo día veintinueve de diciembre, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda, el siguiente día treinta, en el mismo lugar y hora, bajo la presidencia, en ambos casos, del Presidente del Consejo de Administración, don Julian González Gómez, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.º Actividad económica y jurídico-fiscal de la Sociedad, según el resultado de los libros contables.

2.º Formación del balance de la Sociedad para el ejercicio de 1960, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la Memoria, y propuesta sobre distribución de beneficios, si los hubiere.

3.º Notificación a los Consejeros de los acuerdos adoptados por la Sociedad para elevarlos, en su caso, a escritura pública e inscribirlos en el Registro; y

4.º Autorización a los accionistas para transferir acciones a personas no accionistas, a fin de que puedan adquirir esa condición y formar parte del Consejo de Administración para completarle hasta el

numero minimo de siete miembros, cumpliendo la establecido en el artículo 23 de los Estatutos

Breviense a once de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez de Primera Instancia.—1.568.

CAMBADOS

El señor Juez de Primera Instancia de la villa de Cambados y su partido.

Hace publico que en este Juzgado se tramita expediente de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia legal de Jose Pascual Leiro, mayor de edad, casado, labrador y vecino que fue de Meaño en este partido judicial, el cual se ausentó para el Brasil, en veintiseis de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, cuyo expediente fue instado por la esposa del mismo, doña Estrella Solla Domínguez, mayor de edad, sus labores y vecina de Meaño, representada por el Procurador don Juan Rivas Silva, y a los efectos que procedan.

Dado en Cambados a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. — El Juez (ilegible). — El Secretario (ilegible). 5.809. 1.º 18-12-1961.

GRANOLLERS

Don José L. Bermudez de la Fuente Juez de Primera Instancia del partido de Granollers

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expediente para la declaración de fallecimiento de don José Calveras Pons que tuvo su último domicilio en Granollers natural de Barcelona, casado con doña Pilar Atienza García, la cual desapareció de España, con rumbo desconocido el día 22 de diciembre de 1938, en que contaba treinta y un años, sin que desde la expresada fecha se hayan tenido noticias de ninguna clase del mismo

Granollers, 24 de octubre de 1961.—El Juez de Primera Instancia José L. Bermudez de la Fuente.—El Secretario, A. Freixa.—3.062. 1.º 18-12-1961

HOSPITALET

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de Primera Instancia de este partido en resolución de esta fecha dictada en el procedimiento judicial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovido por el Procurador don Angel Muñoz Soto, en nombre y representación de doña Teresa Solé Grajero, contra don Patrocinio Sarrías Villagordo para hacer efectivo el crédito hipotecario de doscientas noventa mil pesetas con mas los intereses legales y otras cuarenta mil pesetas fijadas para costas por el presente se anuncia la venta en pública subasta por segunda vez término de veinte días, la finca especialmente hipotecada que se describe así:

Casa en construcción, señalada de numero 16 en la calle de Pavia de esta ciudad compuesta de bajos con dos tiendas y dos viviendas, cuatro pisos con cuatro viviendas cada uno y ático con tres viviendas edificadas en una porción de terreno de superficie 270 metros 85 decímetros, iguales a 7168 palmos 81 decimos, todos cuadrados Lindante Al frente, en línea de 10,30 metros y 3,30 metros con dicha calle de Pavia; por la izquierda, entrando en línea de 22 metros 45 centímetros, con Rosa Porta, y en otra de 3,35 metros con don José Capderá; a la derecha con Marcelo Planas hoy don Patrocinio Sarrías y al fondo en una línea de seis metros y en otra de cinco metros diez centímetros con don Jose Campderá

Inscrita en el tomo 1.432 del archivo libro 205 del Ayuntamiento de Hospitalet folio 169, finca 10.684 inscripción quinta del Registro de la Propiedad de este partido.

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 24 de enero proximo, a las once horas, haciéndose constar: Que los autos y la certificación de la regia cuarta están de manifiesto en Secretaría; que se entendera que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del actor continuaran subsistiendo, digo subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate; que servirá de tipo para la subasta el setenta y cinco por ciento de la primera, o sea la cantidad de cuatrocientas cincuenta mil pesetas, y que no se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo; que a excepción del demandante, los demás postores deberán consignar en la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento destinado al efecto el diez por ciento del tipo para tomar parte en la misma. Dado en Hospitalet a 1 de diciembre de 1961.—El Secretario, Enrique G. Díez.—9.097.

MADRID

En este Juzgado de Primera Instancia número veintinueve, de Madrid, se siguen autos de procedimiento judicial sumario a que se refiere el artículo ciento treinta y uno de la Ley Hipotecaria, promovidos por don Francisco Fernandez Martín, representado por el Procurador señor Gorostola, contra don Ignacio Gisbert Martínez, hoy sus herederos, sobre reclamación de un préstamo de setenta mil pesetas de principal, con mas intereses y costas con garantía sobre el piso primero número uno, exterior, de la casa número ocho de la calle de Mira el Rio, de esta capital, en cuyos autos se ha acordado hacer saber a los herederos del expresado deudor que en la tercera subasta del referido piso se ha ofrecido la cantidad de noventa mil pesetas, que es inferior a la suma de ciento cinco mil pesetas que sirvió de tipo para la segunda subasta para que ellos o un tercero que autoricen puedan mejorar dicha postura en el plazo de nueve días, haciendo la consignación prevenida en el referido precepto y su regia duodécima. Y con el fin de que sirva de notificación en legal forma a los herederos de don Francisco Gisbert Martínez, se expide el presente en Madrid a once de noviembre de mil novecientos sesenta y uno para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».—El Secretario, H. Bartolomé.—Visto bueno: el Juez de Primera Instancia, Carlos de la Cuesta.—3.987.

Y con el fin de que sirva de notificación en legal forma a los herederos de don Francisco Gisbert Martínez, se expide el presente en Madrid a once de noviembre de mil novecientos sesenta y uno para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».—El Secretario, H. Bartolomé.—Visto bueno: el Juez de Primera Instancia, Carlos de la Cuesta.—3.987.

En virtud de providencia dictada en el día de hoy por el Ilustrísimo señor Don Acisclo Fernandez Carriedo Magistrado Juez de Primera Instancia número 19 de esta capital en los autos de procedimiento especial sumario, seguidos en dicho Juzgado al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovidos por el Procurador don Liborio Fovos Gascón en nombre y representación de doña María Asunción y doña Cristina Cerdan Barrio contra don José María García Miana del Valle, sobre cobro de un crédito hipotecario, se saca a la venta en pública subasta que se celebrará por primera vez en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 13 de enero del año proximo a las doce de su mañana, y por el tipo de doscientas cincuenta mil pesetas pactado a tales fines en la escritura de préstamo base de dicho procedimiento, la finca perseguida en tales autos e hipotecada en la escritura de préstamo base del mismo que es:

Piso principal izquierda mirando desde la escalera de la casa número 74 de la calle de Fernando el Católico de Madrid Ocupa una superficie de 185 metros cuadrados. Consta de hall despacho sala de recibir, cuatro dormitorios, uno de

ellos de servicios y dos con armarios empotrados en la pared, comedor, sala de estar dos cuartos de baño office, cocina y despensa teniendo tres huecos exteriores, tres al patio de manzana y siete al patio central. Le corresponde el cuarto trastero número cinco, así como en copropiedad e indivisión forzosa una catorceava parte de los bienes comunes, entre los cuales está la azotea terreno y servicios generales del edificio, debiendo contribuir a los gastos generales del inmueble en la proporción del siete y medio por ciento

Linda al frente Oeste, con caja de escalera, patio central y piso principal derecha; por la derecha, Sur, con la calle de Fernando el Católico, por la izquierda, Norte, con patio central y patio de manzana, y por el fondo Este, con la casa número 72 de dicha calle, del señor Rodríguez Docampo. El cuarto trastero número cinco, que le es anejo ocupa una superficie de 2,37 metros cuadrados. Linda: Frente, Sur el trastero número cuatro; derecha, Este, sótano de la tienda derecha, izquierda, Oeste, pasillo de entrada, y fondo, Norte, el trastero número seis.

Y se advierte a los licitadores: Que para tomar parte en la mencionada subasta deberán de consignar previamente en la Mesa de este Juzgado, o en la Caja General de Depósitos, el diez por ciento del referido tipo de subasta de doscientas cincuenta mil pesetas. Que no se admitirán posturas inferiores al referido tipo de subasta. Que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regia cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría del que refrenda donde podrán examinarlos los licitadores. Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistentes entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción el precio del remate

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» expido el presente en Madrid a 24 de noviembre de 1961.—El Secretario (ilegible). — Visto bueno: El Juez de Primera Instancia, Acisclo Fernández.—9.098.

Por el presente, que se expide cumpliendo lo mandado por este Juzgado de Primera Instancia número 18 de esta capital en providencia dictada en el día de hoy en autos promovidos con arreglo a la Ley de 2 de diciembre de 1877 por el Banco Hipotecario de España, S. A. contra la Sociedad «Construtora Siracusa, Sociedad Anónima», sobre secuestro y posesión interina de una finca hipotecada en garantía de un préstamo, importante la cantidad de quinientas mil pesetas de capital, sus intereses, gastos y costas se anuncia la venta en pública subasta por primera vez y tipo de tasación la finca hipotecada en garantía de dicho préstamo, que es como sigue:

En Madrid.—Un chalet en construcción que constará de tres plantas en la zona del ensanche paraje conocido por Cruz del Rayo, con fachadas a las calles de Rodríguez Marín y de Antonio Rodríguez Villa de esta capital, tiene de superficie el solar 243 metros 6 decímetros cuadrados, de los que se están edificando en planta de semisótano 102 metros 37 decímetros cuadrados; en planta baja, 140 metros 5 decímetros cuadrados, y en primera planta 104 metros cuadrados distribuyéndose el edificio en un chalet unifamiliar Linda por su frente, al Norte, en línea quebrada, compuesta de dos rectas de 8 y 18 metros, con la calle de Rodríguez Marín; derecha entrando, al Oeste, en línea de 2,06 metros, con la calle de Antonio Rodríguez Villa; iz-

querda, al Este, en línea de 20 metros, con hoteles de la Colonia Cruz del Rayo, y fondo, en línea de 20 metros, con parcela propiedad de «Solares y Viviendas Lentusa».

Tasado en un millón de pesetas.

Para cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de dicho Juzgado, sito en la calle del General Castaños, número uno, se ha señalado el día 31 de enero de 1962 a las once de su mañana, y se previene:

Que servirá de tipo para esta subasta el precio de tasación, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo.

Que para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente los licitadores en la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento público destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento del precio de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Que la consignación del precio se verificará a los ocho días siguientes al de la aprobación del remate.

Que los autos y los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se hallan de manifiesto en la Secretaría y que los licitadores deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos otros; y

Que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para su fijación en el sitio público de costumbre de este Juzgado y su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el de esta provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de esta capital, con quince días de antelación por lo menos, al señalado para la subasta, se expide el presente en Madrid a 6 de diciembre de 1961.—El Juez de Primera Instancia, Pedro Martín de Hijas.—El Secretario, P. S., P. Almarcegui.—5.855.

Don Alfonso Algara Saiz, Magistrado, Juez de Primera Instancia número nueve de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento hipotecario, seguidos a instancia de don Mariano Alonso Llamas contra don Mateo Omeño Fernández y su esposa sobre cobro de un crédito hipotecario de 444.000 pesetas, en cuyos autos, y por proveído de esta fecha, se acordó sacar a la venta en pública subasta por primer vez y con la antelación necesaria de veinte días, la finca hipotecada siguiente:

Edificio compuesto de tres cuerpos, sito en esta capital, barrida del Puente de Vallecas, en el sitio denominado Cerro Negro, que descabeza en el camino de Yeseros, señalado con el número 24 de la calle de Puerto de Arlabán, antes números 24 y 26 provisionales de la calle letra C de la nueva barrida hacia el barrio del Picazo. El primer cuerpo de edificio, con fachada a la indicada calle de Puerto de Arlabán, constará de planta baja, con dos viviendas, y cuatro plantas altas, a dos viviendas por planta, con un total de diez viviendas. El segundo cuerpo de edificio, separado del primero por patio, compuesto de planta baja, con tres viviendas, y tres plantas altas, con cuatro viviendas en cada uno, o sea quince viviendas en total. Y el tercer cuerpo de edificio, separado del segundo por un patio, constará de planta baja, con dos viviendas, y tres plantas altas, con dos viviendas cada una. En total, ocho viviendas. Para el acceso a los edificios segundo y tercero existe un pasillo en el centro del edificio primero. El solar sobre el que se está construyendo afecta la forma de cuadrilátero regular, cuya superficie de ciento noventa y nueve metros ochenta

ta decímetros cuadrados, equivalentes a dos mil quinientos setenta y tres pies cuadrados, aproximadamente, de los cuales ocupa la edificación de los tres cuerpos anteriormente mencionados la mayor parte, destinándose el resto de la indicada superficie del solar a patios. Linda toda la finca por el frente, que es el Saliente, con dicha calle letra C, hoy Puerto de Arlabán, en línea de nueve metros; por la derecha, entrando, que es el Norte, en línea de veintidós metros veinte centímetros, con solar número 22 de la repetida calle letra C o Puerto de Arlabán; por la espalda o testero, que es el Poniente, en otra línea de nueve metros, con finca números 25 y 27 de la calle letra B, y por la izquierda, entrando, que es el Sur, en otra línea de veintidós metros veinte centímetros, con el solar número 28 de la repetida calle C o Puerto de Arlabán.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vallecas, al tomo 394, libro 182, folio 190, finca 1.671, inscripción sexta.

Para cuyo remate, que se celebrará en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la calle del General Castaños, número 1, se ha señalado el día 18 de enero del año próximo, a las doce horas de su mañana, bajo las siguientes condiciones:

Que dicha finca sale a subasta por segunda vez en la cantidad de cuatrocientas sesenta y cinco mil pesetas, cifra equivalente al setenta y cinco por ciento de la primera, no admitiéndose postura alguna inferior a dicho tipo; que para tomar parte, los licitadores deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento del mismo, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los autos y la certificación del Registro, a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en Secretaría, donde podrán ser examinados por los licitadores, entendiéndose que todos ellos aceptan como bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a 24 de noviembre de 1961.—El Juez, Alfonso Algara.—El Secretario (legible).—9.114.

En virtud de providencia dictada en el día de hoy por el ilustrísimo señor don Acisclo Fernández Carriazo, Magistrado, Juez de Primera Instancia número cincuenta y dos de esta capital, en autos de procedimiento sumario promovidos al amparo del artículo 141 de la Ley Hipotecaria, a instancia de don Antonio Pardo Pimentel y Gamazo contra dona María de Mora Roch, sobre pago de pesetas que se celebrará nuevamente por primera vez, por haber sido dejada sin efecto la anterior, en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 31 de enero del año próximo, a las doce de su mañana, y por el tipo que después se dirá, las fincas hipotecadas en la escritura de préstamo base del procedimiento, que son las siguientes:

Primera.—En el partido de Villares, un trozo de tierra que comprende lo siguiente: Una suerte de tierra, en siete bancales, en la cañada de Juan Ignacio, que se riegan con el hilo del cercado, con algunos árboles frutales y parras, de una extensión superficial de cincuenta y dos áreas, y ochenta y seis centiáreas, otra cañada junto a esta, llamada de los Tomases, compuesta de tres bancales y un patio dedicados a regadío cereales, con algunos árboles frutales y con una extensión de veinte áreas diez centiáreas; otra suerte en la cañada del Pocio, que

comprende seis bancales, también de cereales regadío con árboles frutales; de diecisiete áreas noventa y dos centiáreas; otro trozo de secano comprendido entre estas cañadas y el arroyo de Vocorto, de sesenta áreas de extensión aproximadamente, otra suerte llamada Huerta de Candiles, con ocho bancales, dedicados a regadío cereales, con algunos frutales y olivos; está enclavada en terrenos de El Porcico, cuyo secano la circunda, y tiene de cabida veintitres áreas once centiáreas y el secano una hectárea aproximadamente, con almendros y algunos olivos; el olivar de la Capillana situado sobre los secanos del Pocio, en dirección Norte, que contiene ciento veintiséis olivos, en una extensión de una hectárea treinta áreas; la cañada del Huerto, en una extensión, digo, compuesta de veintiocho bancales y varios porillos de cereales de riego con árboles frutales y treinta y siete olivos, de una extensión de tres hectáreas cuarenta y nueve áreas y treinta y seis centiáreas; otra suerte llamada Ribazo de la Cañada, con cuatro bancales riego a cereales, con una higuera, parras y dieciséis olivos y una extensión de diecisiete áreas ochenta y siete centiáreas; el banegal del Huerto y cuatro torueros de regadío cereales, con algunos ciruelos y tres olivos, de una superficie de veintiseis áreas y veintiocho centiáreas; Las Lomas, o sea cuatro suertes de olivar que se conocen por loma de García, cañada de Poch, toruero del Arroyo y loma de la Era; tiene trececientos setenta y cuatro olivos, en una extensión de tres hectáreas veintinueve áreas de riego y un banegal de riego cereales de siete áreas sesenta y una áreas y una balsa. La suerte del plúto, de una cabida de setenta y cinco áreas trece centiáreas a olivar con cuarenta y cuatro olivos, membrilleros y tres higuera, la Hoyica, suerte del olivar con ciento treinta y siete pies de olivo y una cabida de una hectárea setenta y siete áreas veintiseis centiáreas; las oliveras de Rufo con nueve pies de olivo y una extensión de diez áreas; los Balsanos, con veintiseis olivos de riego y una extensión de cuarenta y cinco áreas; y la suerte llamada de la Alcañada, con sesenta y cinco olivos, tierra de riego y una extensión de ochenta y tres áreas y ochenta y nueve centiáreas. La cabida total de esta finca es quince hectáreas dieciocho áreas y treinta y nueve centiáreas, fertilizándose la parte de riego con a una del hilo del cercado y acequia de Gutar.

Lindas: Saliente, dona Mercedes Amores de la Parra, don Manuel Alcázar Sánchez, dona Mercedes Amores de la Parra, Felipe Alcázar y dicha dona Mercedes, digo, y dona Granada de Mora Amores, Manuel García Álvarez, Mercedes Amores de la Parra, Felipe Alcázar y dicha dona Mercedes Amores de la Parra Norte; Hijos de Pedro José López y camino del cercado, Poniente; camino de las Juntas desde el Balsón, José López López, camino de las Juntas, Carmelo García Rodríguez, herederos de don Arturo Amores de la Parra y camino de las Juntas, hasta el arroyo de Viverto, y dona Mercedes Amores de la Parra.

Sale a subasta en la cantidad de sesenta y cinco mil pesetas, y se admite a los licitadores; que para tomar parte en la subasta deberán consignar en la Mesa del Juzgado o en la Casa General de Depósitos el diez por ciento del tipo de la

Segunda.—Una suerte de olivar conocida por los Valcañales de Arriba, con ciento treinta y tres olivos de riego bajo la acequia de Gutar, y seis de secano, con una extensión de una hectárea una cuarta y catorce centiáreas. Linda: al Saliente y Mediodía, Francisco y José López Al Poniente, el camino viejo de Elch; a Pérez, Antonio Galera y Manuel Alfaro, y Norte, dona Mercedes Amores de la Parra.

Sale a subasta en la cantidad de sesenta y cinco mil pesetas. Y se admite a los licitadores; que para tomar parte en la subasta deberán consignar en la Mesa del Juzgado o en la Casa General de Depósitos el diez por ciento del tipo de la

fines, o fincas, en que deseen tomar parte. Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta. Que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría del que refrenda. Que se entenderá que todo licitador los acepta como bastante. Que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno: El Juez de Primera Instancia (ilegible).—9.075.

Don Rafael Salazar Bermúdez, Magistrado, Juez de Primera Instancia del número dieciséis de esta capital.

Por el presente hago saber: Que por providencia de este día, dictada en la pieza de Administración del juicio universal de quiebra necesaria de la Sociedad mercantil de responsabilidad limitada «Bodegas Santa Rita González Loma Sociedad Limitada», se ha acordado celebrar una tercera subasta, sin sujeción a tipo, por término de veinte días, y simultáneamente, de la finca siguiente:

«Una finca urbana e industrial situada en la calle del Canal del Príncipe Alfonso, sin número, del término municipal de Argamasilla de Alca. Mide una superficie de dos mil quinientos metros cuadrados, y está dedicada a fábrica de alcoholés y piquetas. Linda: por derecha de su entrada, con Julián González; izquierda, con quión de Bernardo Ropero, y fondo, camino vecinal. Superficie edificada doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, destinados a alojamiento de al fábrica de holandas, vivienda cuadas y otras dependencias. Dentro del mismo recinto existe una cueva de unas doce mil arrobas de envases de cemento.

Para el acto del remate, que tendrá lugar, doble y simultáneamente, en este Juzgado, General Castaños, número uno segundo, Madrid, y en el de igual clase de Alcazar de San Juan se ha señalado el día treinta y uno de enero del año próximo, a las once horas, y se llevará a efecto bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Esta tercera subasta se celebra sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en el remate deberán consignar previamente los licitadores la cantidad de quince mil ciento noventa y cinco pesetas, que es el diez por ciento del tipo que sirvió de venta para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que podrán hacerse proposiciones a calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Que si resultaren dos posturas iguales se abrirá nueva licitación entre los dos rematantes ante el Juzgado que conceda de los autos adjudicándose al mejor postor.

Quinta.—Que la finca urbana e industrial sale a subasta con todas sus instalaciones de fábrica de holandas, bodega y una báscula puente de 3.000 kilogramos.

Sexta.—Que la finca objeto de subasta carece de título de propiedad, no figurando tampoco inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcazar de San Juan adquiriéndola así el rematante.

Séptima.—Y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes—si los hubiere— al crédito y responsabilidad que se prescribe, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta

y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.—El Secretario (ilegible).—El Juez, Rafael Salazar.—9.074.

En este Juzgado de Primera Instancia número 13 de esta capital, pende expediente promovido por don Salvador Ramón Lino Martínez Azúa, en suplica de que se le autorice la unión de sus apellidos como si fuera uno sólo, pasando como segundo apellido el de Espadero fundándose para ello en que por el innombrado apellido Espadero era más conocido.

En su virtud, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de 13 de diciembre de 1870, para ejecución de las Leyes de Matrimonio y Registro Civil, y de lo acordado en providencia de esta fecha se publica cuanto queda expuesto, a fin de que puedan presentar su oposición ante este Juzgado cuantos se crean con derecho a ello, a cuyo efecto se señala el término de tres meses, a contar desde la publicación del presente edicto en los periódicos oficiales.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», exrido el presente con el visto bueno del señor Juez, que firmo en Madrid a veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y uno.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno, el Juez de Primera Instancia (ilegible).—9.113.

MALAGA

Don Adolfo Alonso de Prado Peñarribia, Magistrado Juez de Primera Instancia del Juzgado número uno de esta capital.

Hace saber: Que el día 23 de enero próximo, y hora de las doce, tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado la venta en pública subasta por primera vez de la siguiente finca:

Casa sita en la calle del Troncon, llamada hoy de José Antonio Primo de Rivera, de la villa de Fuenziriola demarcada hoy con el número 10, compuesta de un solo cuerpo en planta baja, con sala, cocina, patio y en este un pozo con agua potable, medianero con la casa contigua y tiene una superficie de doscientos cuarenta y tres metros treinta y cuatro decímetros y sesenta y cuatro milímetros cuadrados estando instalado en dicha casa un establecimiento destinado a bar, denominado «Bar O.é», con sus instalaciones y enseres correspondientes.

El tipo de subasta es de doscientas mil pesetas, fijado en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo y debiendo los licitadores consignar previamente en la Mesa del Juzgado el diez por ciento de tal suma, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se hace constar que los autos y la certificación del Registro, a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Pues así esta acordado en el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del Procurador don José Díaz Domínguez en nombre de don David Storch Maclean contra doña Taylor Beale Donn, en reclamación de cantidad.

Dado en Malaga a 27 de noviembre de 1961.—El Juez, Adolfo Alonso de Prado El Secretario (ilegible).—9.099.

NULES

Don Adolfo Fuertes Simas, Juez de Primera Instancia de Nules.

Se anuncia por el presente la muerte sin testar de Mercedes Mallén Ardanaz, soltera, natural de Lagroño, de ochenta años, hija de Vicente y de Claudia, ocurrido el 18 de octubre de 1961 en Onda, y su domicilio, calle Colón, 1. 2.ª, donde vivía sola, sin ascendientes ni descendientes ni herederos conocidos, y se llama a los parientes que según parece tiene o tenía un hermano mayor que ella, llamado Abdón Mallén Ardanaz, que se encontraba en América del Norte, de donde hace unos seis o siete años regresó a Onda, volviendo luego a América, ignorando su domicilio, y que según referencias tenía un hijo, farmacéutico, del que se ignoran otras circunstancias, y también se llama a los parientes que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en este Juzgado a reclamación, dentro del término de sesenta días, en el juicio de prevención de abintestado que se halla en trámite.

Nules, 11 de diciembre de 1961.—El Juez, Adolfo Fuertes.—El Secretario (ilegible), 5.847.

SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Don Joaquín Codes Contreras, Juez comarcal de San Lorenzo del Escorial.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramita expediente de cambio de apellidos, promovido a instancia de don Manuel Conejo Ballesteros, mayor de edad, casado, embaucado, de esta vecindad, con domicilio en calle Timoteo Padros, número 15, natural de Ollas del Rey (Toledo), hijo legítimo de don Amalio Conejo Magán y de doña Higinia Ballesteros Tordesillas, siendo sus abuelos paternos don Manuel Conejo Peñaña y doña Segunda Magán López, y maternos, don Manuel Ballesteros Hernández y doña Luisa Tordesillas Caballero, inscrito al Registro Civil de dicha población, al libro 20, folio 116, número 29.

Y en cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 349 y 352 de la Ley del Registro Civil, se publica el presente, que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el correspondiente al del nacimiento del solicitante y se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de las provincias de Madrid y Toledo, con el fin de que aquellos a quienes pueda afectar lo solicitado y tengan interés legítimo puedan personarse en el expediente como partes o hacer las alegaciones que estimen, dentro del plazo o término de quince días, a partir de la fecha de publicación del presente edicto.

Dado en San Lorenzo del Escorial a 6 de octubre de 1961.—El Juez, Joaquín Codes.—9.076.

VALENCIA

Don Pedro Roca de la Matta, Magistrado, Juez de Primera Instancia número seis de los de Valencia.

Por el presente edicto hago saber que en este Juzgado y Secretaría, con el número doscientos veinticinco de mil novecientos cincuenta y tres, se tramita expediente sobre declaración de fallecimiento del súbdito alemán don Roberto Teschen-dorff del Marmol, cuyo expediente ha sido promovido por su hermana doña María y por la entidad «Teschen-dorff y Compañía».

Dado en Valencia a veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y uno.—El Juez, Pedro Roca.—El Secretario, Adolfo Sirvent.—9.005. 1.ª 18-12-1961.